ECOLOGÍA POLÍTICA DEL PAISAJE URBANO

EDICIONES
COMUNICACIÓN
CIENTÍFICA

Fermín Carreño Meléndez
Martín David Rosas Martínez

Ecología política del paisaje urbano

EDICIONES
COMUNICACIÓN
CIENTÍFICA

Ediciones Comunicación Científica se especializa en la publicación de conocimiento científico de calidad en español e inglés en soporte de libro impreso y digital en las áreas de humanidades, ciencias sociales y ciencias exactas. Guía su criterio de publicación cumpliendo con las prácticas internacionales: dictaminación de pares ciegos externos, autentificación antiplagio, comités y ética editorial, acceso abierto, métricas, campaña de promoción, distribución impresa y digital, transparencia editorial e indexación internacional.

Cada libro de la Colección Ciencia e Investigación es evaluado para su publicación mediante el sistema de dictaminación de pares externos y autentificación antiplagio. El proceso de dictaminación y su trazabilidad puede consultarse, así como el libro en Acceso Abierto.

comunicacion-cientifica.com

DOI.ORG/10.52501/cc.413

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
PUBLICACIONES ARBITRADAS
HUMANIDADES, SOCIALES Y CIENCIAS

CC+I
COLECCIÓN CIENCIA e INVESTIGACIÓN

Ecología política del paisaje urbano

Martín David Rosas Martínez
Fermín Carreño Meléndez

EDICIONES
COMUNICACIÓN
CIENTÍFICA

1.-

Ecología política del paisaje urbano / Fermín Carreño Meléndez, Martín David Rosas Martínez .— Ciudad de México : Comunicación Científica, 2026. (Colección Ciencia e Investigación).

110 páginas ; 23 x 16.5 centímetros

DOI: 10.52501/cc.413

ISBN: 978-968-9738-68-8

1. Ecología política. 2.Paisaje urbano. I. Rosas Martínez, Martín David, autor, II. Carreño Meléndez, Fermín, autor.

LC: JA75.8 C37 DEWEY: 304.2 C37

La titularidad de los derechos patrimoniales y morales de esta obra pertenece a los autores D.R. © Fermín Carreño Meléndez y Martín David Rosas Martínez, 2026. Reservados todos los derechos conforme a la Ley. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es

Primera edición en Ediciones Comunicación Científica, 2026

Diseño de portada: Francisco Zeledón • Interiores: Guillermo Huerta

Ediciones Comunicación Científica, S. A. de C. V., 2026,
Av. Insurgentes Sur 1602, piso 4, suite 400,
Crédito Constructor, Benito Juárez, 03940, Ciudad de México,
Tel.: (52) 55-5696-6541 • Móvil: (52) 55-4516-2170
info@comunicacion-cientifica.com • www.comunicacion-cientifica.com
comunicacioncientificapublicaciones @ ComunidadCient2

ISBN 978-968-9738-68-8

DOI 10.52501/cc.413

Esta obra fue dictaminada mediante el sistema de pares ciegos externos.
La trazabilidad de la dictaminación puede consultarse, así como el libro en acceso abierto, en https://doi.org/10.52501/cc.413

Índice

Resumen 11

1. Introducción 13
    1.1. El paisaje urbano como construcción social y política 14
    1.2. Capitalismo, urbanización y producción del espacio. 15
    1.3. Ecología política y justicia socioambiental en la ciudad . . . 15
    1.4. Crisis climática y vulnerabilidad urbana. 16
    1.5. El derecho a la ciudad y la búsqueda de alternativas 17
        Estructura del trabajo 17

2. Fundamentos teóricos de la ecología política del paisaje urbano . 19
    2.1. Orígenes históricos. 19
    2.2. Evolución histórica. 21
    2.3. Conceptos centrales y categorías analíticas 22
    2.4. Metodologías en la ecología política 24
    2.5. Debates y críticas dentro de la ecología política 26
    2.6. Aportes latinoamericanos y decoloniales 28
    2.7. Metabolismo urbano desigual: agua, energía, alimentos, residuos y transformaciones del paisaje 29
    2.8. Paisaje urbano, poder simbólico e imaginarios culturales: memoria, narrativas y apropiaciones del espacio 31
    2.9. Teoría urbana crítica: producción del espacio, urbanización del capital, movimientos sociales y ecologías políticas en perspectivas latinoamericanas y europeas 33

3. Capitalismo, poder y producción desigual del paisaje urbano. Introducción al concepto de producción del espacio urbano . . 37
3.1. Capitalismo y urbanización 38
3.2. Estado, planificación urbana y políticas públicas 39
3.3. Gentrificación y mercantilización del espacio urbano 41
3.4. Segregación socioespacial y periferias urbanas 43
3.5. Impactos socioambientales de la desigualdad urbana 44
3.6. Procesos de resistencia urbana y derecho a la ciudad 45
3.7. Poder, hegemonía y control en la ciudad: el paisaje urbano como escenario de legitimación política 47
3.8. Monumentalidad, autoritarismo y ciudad-espectáculo: disputas por el poder y el control en el espacio urbano contemporáneo 49
3.9. Neoliberalismo urbano y la reconfiguración del paisaje: mercado inmobiliario, privatización del espacio público y resistencias contemporáneas 52
3.10. Resistencias urbanas y contrahegemonías contemporáneas: reapropiación del espacio, movimientos sociales, autogestión comunitaria y disputas simbólicas en la ciudad 55

4. Impactos, desigualdades y conflictos socioambientales urbanos . 59
4.1. Desigualdad ambiental, segregación socioambiental y los impactos globales producidos por la ciudad 59
4.2. Contaminación atmosférica, acceso desigual al agua y la gestión urbana de residuos 61
4.3. Islas de calor urbanas: distribución desigual, vulnerabilidad climática, salud pública y estrategias de mitigación con justicia climática 64
4.4 Ruido urbano, desigualdad en la movilidad, salud mental y los impactos acumulativos de la injusticia ambiental 67
4.5. Metabolismo urbano desigual: agua, energía, alimentos, residuos y transformaciones del paisaje 70
4.6. Gobernanza territorial urbana: agua, movilidad, residuos, infraestructura verde y conflictos de planificación 72
4.7. Ciudades en comparación: desigualdades urbanas,

movilidad, resiliencia y justicia ambiental en Ciudad de México, São Paulo, Medellín, Barcelona y Berlín 75

5. Actores, resistencias y alternativas socioecológicas urbanas 79
5.1. Rol de las élites económicas y políticas en la producción del paisaje urbano 79
5.2. El poder económico, estatal, financiero y mediático en la construcción desigual de la ciudad neoliberal. 79
5.3. Movimientos sociales urbanos por la vivienda, el agua, el ambiente, la igualdad de género y las expresiones juveniles en la ciudad contemporánea. 82
5.4. Ecofeminismo, resistencias comunitarias y prácticas de comunalidad frente al urbanismo neoliberal. 85
5.5. Resistencias urbanas globales: luchas territoriales en México, Brasil, Europa y el Sur Global 87
5.6. Urbanismo tecnocrático y participativo: derecho a la ciudad, experiencias latinoamericanas y desafíos actuales 90
5.7. Comunes urbanos y transición socioecológica: alternativas al urbanismo neoliberal, experiencias globales y desafíos contemporáneos 92
5.8. Ciudad verde, resiliencia y justicia climática: economía solidaria, transiciones urbanas y experiencias comparadas entre América Latina y Europa 95
5.9. Críticas a la sustentabilidad urbana hegemónica: perspectivas decoloniales, feministas, comparativas globales y horizontes hacia una transición poscapitalista 98
5.10. Desigualdades urbanas en América Latina: modernización, resiliencia, neoliberalismo y resistencias en perspectiva comparada 101

Referencias 107
Sobre los autores 109

Resumen

La presente obra analiza el paisaje urbano desde la ecología política, entendido como una construcción sociohistórica atravesada por relaciones de poder, procesos de acumulación capitalista y profundas desigualdades socioambientales. Por ello, toma un enfoque interdisciplinario que conecta la geografía crítica, la teoría urbana, la sociología y los estudios ambientales. Paralelamente, se examina cómo el Estado, el mercado y diversos actores sociales intervienen en la producción desigual del espacio urbano. El texto aborda fenómenos como la mercantilización del suelo, la gentrificación, la segregación socioespacial y la distribución asimétrica de riesgos y beneficios ambientales, especialmente en su vinculación con la crisis climática y la vulnerabilidad urbana. De igual modo, se incorporan los aportes de la ecología política latinoamericana y las perspectivas decoloniales que permiten cuestionar los modelos hegemónicos de desarrollo y urbanización impuestos en el Sur Global. También se incluye la dimensión simbólica y cultural del paisaje urbano con relación al papel de los imaginarios, la memoria colectiva y las prácticas cotidianas en la apropiación del espacio. Finalmente, se reflexiona sobre el derecho a la ciudad y las formas de resistencia y acción colectiva que buscan construir alternativas socioecológicas orientadas a la justicia social, la equidad territorial y la sustentabilidad urbana.

Palabras clave: *ecología política, paisaje urbano, justicia ambiental, derecho ciudad, desigualdad urbana.*

1. Introducción

El estudio del *paisaje urbano* constituye un campo de análisis de creciente relevancia en el marco de la crisis ambiental global, la expansión de las ciudades y la intensificación de las desigualdades socioespaciales. Lejos de ser un mero escenario físico conformado por calles, edificaciones y espacios verdes, el paisaje urbano debe comprenderse como una construcción social, histórica y política donde confluyen las tensiones entre el mercado, el Estado y la ciudadanía. En este espacio se materializan las relaciones de poder, los procesos de acumulación capitalista, los proyectos de modernización, las resistencias sociales y las múltiples prácticas cotidianas que configuran la vida urbana.

Desde una perspectiva crítica, resulta evidente que las ciudades contemporáneas no son producto de un desarrollo lineal y armónico, sino de disputas, desigualdades y contradicciones. La ecología política del paisaje urbano surge precisamente como un enfoque que busca visibilizar esas dinámicas, cuestionando la aparente neutralidad del planeamiento urbano y de las intervenciones estatales o privadas. Este campo interdisciplinario integra aportes de la geografía crítica, la sociología urbana, la antropología, la arquitectura y las ciencias ambientales, con el fin de analizar cómo el poder político y económico influye en la producción desigual de los espacios y en la distribución asimétrica de los beneficios y riesgos ambientales.

El paisaje urbano refleja, en consecuencia, una dialéctica permanente entre naturaleza y sociedad, donde el entorno construido interactúa con los procesos ecológicos y, a su vez, con las estructuras sociales que determinan quién accede a recursos como el agua, la energía, el suelo o los espacios verdes. De ahí que no pueda entenderse únicamente desde su dimensión estética o arquitectónica, sino que requiere un abordaje socioecológico que contemple el trasfondo político de su configuración.

1.1. El paisaje urbano como construcción social y política

Uno de los aportes fundamentales de Henri Lefebvre al pensamiento urbano fue la idea de que el espacio no es un contenedor neutral, sino un producto social resultado de relaciones históricas, económicas y culturales. El concepto *derecho a la ciudad*, introducido por Lefebvre en 1968, sigue siendo central para comprender las luchas contemporáneas por el acceso equitativo a los bienes urbanos y la posibilidad de que los habitantes participen activamente en la transformación de su entorno. Bajo esta óptica, el paisaje urbano no se reduce a la materialidad de edificios y calles, sino que incluye prácticas, significados e imaginarios que dan forma a la experiencia urbana.

Autores como Manuel Castells han enfatizado además el papel de las transformaciones tecnológicas y de la globalización en la reconfiguración del espacio urbano. En la llamada *sociedad red*, las ciudades se han convertido en nodos estratégicos de flujos de información, de capital y de personas, lo que implica nuevas formas de segregación y exclusión. Así, mientras ciertos sectores acceden a redes globales de conectividad, otros permanecen marginados y confinados en territorios vulnerables.

La geógrafa Doreen Massey, por su parte, introdujo la noción de *geometría del poder* para aludir que los espacios urbanos están atravesados por relaciones desiguales de poder que definen quién se beneficia y quién queda excluido. Desde esta perspectiva, el paisaje urbano refleja y reproduce las jerarquías sociales, mostrando de manera visible la coexistencia de la opulencia y la pobreza en territorios próximos, pero profundamente desiguales.

1.2. Capitalismo, urbanización y producción del espacio

El capitalismo ha encontrado en la urbanización una vía estratégica para absorber excedentes de capital y resolver sus crisis periódicas, como ha señalado David Harvey. Las ciudades son, en este sentido, laboratorios de acumulación y especulación, donde la tierra y la vivienda se transforman en mercancías sometidas a la lógica del mercado. Procesos como la gentrificación, la especulación inmobiliaria o la privatización de bienes comunes urbanos muestran cómo la configuración del paisaje responde menos a necesidades sociales que a intereses financieros.

Este fenómeno no se limita al Norte Global. En América Latina, ciudades como Ciudad de México, São Paulo o Buenos Aires han experimentado megaproyectos urbanos que bajo la bandera de la modernización y la competitividad global han desplazado comunidades, fragmentado el tejido social y acentuado la desigualdad espacial. La construcción de corredores empresariales, centros comerciales, residencias de lujo o infraestructura para megaeventos ha sido acompañada de procesos de expulsión de poblaciones vulnerables hacia periferias desprovistas de servicios básicos.

Así, el paisaje urbano se convierte en escenario de disputa: mientras las élites económicas buscan maximizar el valor de la tierra y consolidar enclaves de privilegio, las comunidades populares luchan por conservar sus territorios, resistiendo los embates de la especulación y reclamando su derecho a habitar la ciudad.

1.3. Ecología política y justicia socioambiental en la ciudad

La ecología política aporta un marco analítico esencial para comprender las desigualdades socioambientales que atraviesan los espacios urbanos. A diferencia de la ecología urbana clásica, que se centra en estudiar las interacciones entre seres humanos y ecosistemas urbanos, la ecología política introduce una mirada crítica sobre el papel del poder y las estructuras sociales en la configuración de los territorios.

En este sentido, fenómenos como la distribución desigual de áreas verdes, la localización de basureros o industrias contaminantes en barrios periféricos, o la exposición diferencial a riesgos climáticos, no son accidentales, sino el resultado de decisiones políticas y económicas que privilegian a ciertos sectores en detrimento de otros. Las injusticias ambientales se hacen evidentes cuando comunidades empobrecidas cargan con los mayores impactos de la contaminación o carecen de acceso a servicios esenciales como agua potable y saneamiento.

La justicia ambiental, entendida como la distribución equitativa de beneficios y cargas ambientales, se convierte entonces en un principio rector para repensar el paisaje urbano. Este enfoque conecta con propuestas de movimientos sociales y académicos que abogan por una ciudad sustentable, inclusiva y democrática, donde el bienestar colectivo prevalezca sobre la lógica mercantil.

1.4. Crisis climática y vulnerabilidad urbana

En el contexto actual de emergencia climática, el paisaje urbano se encuentra particularmente amenazado por fenómenos como las olas de calor, las inundaciones, el incremento del nivel del mar y la degradación de ecosistemas urbanos. La expansión de superficies impermeables, la pérdida de vegetación y la contaminación atmosférica intensifican los impactos del cambio climático, generando condiciones de vulnerabilidad diferenciada entre los habitantes de la ciudad.

El concepto de islas de calor urbanas, por ejemplo, muestra cómo la ausencia de vegetación y la concentración de infraestructuras de concreto y asfalto elevan significativamente las temperaturas en áreas densamente pobladas. Este fenómeno afecta de manera desproporcionada a comunidades pobres que carecen de acceso a sistemas de climatización o viviendas adecuadas, poniendo en riesgo su salud y calidad de vida.

La resiliencia urbana, entendida como la capacidad de las ciudades para adaptarse y recuperarse frente a perturbaciones ambientales, no puede analizarse al margen de la desigualdad social. Una urbe con amplias brechas socioeconómicas será menos resiliente, pues una parte de

su población se verá siempre más expuesta a los riesgos, sin contar con los recursos necesarios para mitigarlos.

1.5. El derecho a la ciudad y la búsqueda de alternativas

El debate sobre el derecho a la ciudad, retomado y actualizado por múltiples autores y movimientos sociales, constituye una de las principales banderas frente al urbanismo neoliberal. Este derecho no se limita a la posibilidad de habitar un espacio, sino que implica participar en la toma de decisiones, acceder de manera equitativa a los servicios y espacios comunes, y transformar colectivamente el entorno urbano.

Las luchas por vivienda digna, la defensa de áreas verdes, la creación de huertos comunitarios, los proyectos de movilidad sustentable y las experiencias de urbanismo participativo son expresiones concretas de resistencia frente a la mercantilización del espacio. Estos movimientos cuestionan el modelo dominante y proponen alternativas basadas en la justicia social, la equidad de género, el respeto a la diversidad cultural y la sustentabilidad ambiental.

Estructura del trabajo

A partir de estas reflexiones iniciales, el presente documento se estructura en varios capítulos que buscan profundizar en la ecología política del paisaje urbano.

En el primer capítulo se abordan los fundamentos teóricos y metodológicos de la ecología política, explorando sus orígenes, debates y categorías analíticas. En el segundo, se examina la producción desigual del paisaje urbano, atendiendo a la relación entre capitalismo, acumulación y configuración espacial. Se analizan, posteriormente, los actores sociales y su papel en la reproducción de desigualdades y en la construcción de alternativas. El siguiente capítulo está dedicado a los impactos socioambientales derivados de la urbanización desigual. Más adelante, se plantean las perspectivas de transformación socioecológica, considerando innovaciones en

políticas públicas y urbanismo participativo. Y finalmente, se desarrollan estudios de caso y reflexiones críticas que ilustran cómo se expresan estas dinámicas en contextos concretos y qué posibilidades existen para avanzar hacia ciudades más justas y sustentables.

En suma, la introducción al estudio de la ecología política del paisaje urbano nos sitúa frente a un campo de investigación crítico y necesario para entender las ciudades contemporáneas. Reconocer el carácter político del espacio urbano permite desnaturalizar las desigualdades que se manifiestan en él y abrir caminos hacia alternativas transformadoras.

Este trabajo, por tanto, no se limita a describir problemáticas, sino que busca contribuir a un debate más amplio sobre el futuro de las ciudades, planteando la urgencia de repensar la relación entre sociedad y naturaleza desde principios de justicia socioambiental, equidad y sustentabilidad. La ciudad no debe ser concebida como mercancía ni como simple espacio de acumulación, sino como un bien común cuya organización debe orientarse al bienestar colectivo y a la preservación de la vida en todas sus formas.

2. Fundamentos teóricos de la ecología política del paisaje urbano

2.1. Orígenes históricos

La *ecología política* surgió en los años setenta, en un escenario global donde convergieron múltiples crisis: la crisis del petróleo de 1973, las tensiones de la Guerra Fría, los movimientos sociales de liberación en África y América Latina, y una creciente preocupación ambiental a nivel internacional. El informe del Club de Roma (*Los límites del crecimiento*, Meadows et al., 1972) fue uno de los documentos más influyentes de la época. Advertía que el crecimiento económico sostenido llevaría al colapso ecológico debido al consumo acelerado de recursos naturales. Sin embargo, este diagnóstico fue criticado por plantear soluciones tecnocráticas que no atendían las desigualdades sociales y económicas entre países y clases sociales.

En este contexto, comenzaron a emerger voces críticas desde la geografía, la antropología y la sociología, que insistían en que el ambiente no podía analizarse como un sistema neutral, sino como un campo atravesado por poder. Autores como Piers Blaikie y Harold Brookfield (1987) sostuvieron que fenómenos como la erosión o la desertificación no eran procesos "naturales" inevitables, sino que estaban directamente vinculados con la distribución desigual de la tierra, las políticas estatales y la dinámica del mercado mundial. La publicación de *Land Degradation and Society* marcó un hito, pues demostró que la degradación ambiental es siempre un hecho social y político.

De manera paralela, Michael Watts (1983) publicó *Silent Violence*, un estudio sobre las hambrunas en Nigeria, donde mostró que la escasez de alimentos no podía explicarse únicamente por la sequía o las malas cosechas. En realidad, estaba vinculada con la historia colonial, la introducción de cultivos comerciales orientados al mercado y las políticas de ajuste económico. Su aporte fue decisivo para comprender que lo que se denominaba "desastre natural" era en muchos casos el resultado de decisiones humanas injustas.

El pensamiento marxista, especialmente a través de David Harvey, también influyó profundamente en la ecología política. Harvey (2004) introdujo la noción de *acumulación por desposesión*, mostrando cómo el capitalismo expande sus fronteras a través del despojo de bienes comunes, la privatización de servicios básicos y la urbanización especulativa. De este modo, la ecología política no sólo se ocupó de los recursos rurales, sino también de las ciudades, entendidas como laboratorios de acumulación y exclusión.

Paralelamente, el *feminismo ambiental* aportó perspectivas críticas al visibilizar que la carga desproporcionada de trabajo que las mujeres —especialmente en comunidades rurales y urbanas empobrecidas— asumían en el manejo del agua, la alimentación y el cuidado de la biodiversidad. Vandana Shiva (2005) denunció la forma en que la Revolución Verde y la expansión de corporaciones agroindustriales debilitaban la soberanía alimentaria, generando dependencia tecnológica y afectando particularmente a las mujeres campesinas.

Finalmente, los estudios poscoloniales introdujeron un cuestionamiento al eurocentrismo.

Arturo Escobar (1996) argumentó que el "desarrollo" no era un proceso neutral, sino un discurso que imponía modelos occidentales sobre el Sur Global, invisibilizando conocimientos locales y formas alternativas de relacionarse con la naturaleza.

En síntesis, la ecología política nació como una respuesta crítica al discurso tecnocrático y a las explicaciones naturalizadas de la crisis ambiental. Desde sus inicios, colocó el poder, la desigualdad y la historia en el centro de la reflexión, sentando las bases para su consolidación como campo interdisciplinario.

2.2. Evolución histórica

La evolución de la ecología política se puede entender en cuatro grandes fases que muestran cómo fue ampliando sus objetos de estudio y sus marcos de análisis:

a) Fase rural-agraria (1970–1980)

Los primeros trabajos se centraron en comunidades campesinas y en el análisis de recursos como la tierra y los bosques. Se buscaba demostrar que los problemas ambientales estaban atravesados por procesos coloniales y poscoloniales, así como por políticas de desarrollo que reproducían la desigualdad. Ejemplos clásicos incluyen los estudios sobre erosión en África subsahariana, deforestación en el sudeste asiático y conflictos agrarios en América Latina.

b) Fase de justicia ambiental (1990)

En Estados Unidos, el movimiento de justicia ambiental reveló cómo comunidades pobres y racializadas estaban expuestas de manera desproporcionada a riesgos ambientales. Robert Bullard (1993) documentó que barrios afroamericanos eran elegidos sistemáticamente para la instalación de basureros tóxicos e industrias contaminantes, lo que dio lugar al concepto de racismo ambiental. Este giro hizo visible que la ecología política debía atender no sólo a los recursos rurales, sino también a las luchas urbanas y a la intersección entre ambiente, raza y clase.

c) Fase urbana (2000-2010)

Con la entrada del nuevo milenio, surgió la *ecología política urbana*, impulsada por autores como Erik Swyngedouw, Nik Heynen y Maria Kaika. Ellos introdujeron el concepto de *metabolismo urbano*, que describe cómo circulan el agua, la energía, los alimentos y los residuos dentro de las ciudades. Estas circulaciones no son neutras, sino que están atravesadas por desigualdades sociales: mientras ciertas zonas disfrutan de parques, servicios y aire limpio, otras cargan con basureros, contaminación y déficit de servicios básicos (Swyngedouw y Heynen, 2003).

Este enfoque permitió vincular la ecología política con debates sobre urbanismo neoliberal, gentrificación, derecho a la ciudad y resiliencia urbana. La ciudad pasó a entenderse como un espacio donde se materializan desigualdades ambientales y donde emergen nuevas formas de resistencia ciudadana.

d) Fase global y decolonial (2010–actualidad)

En las últimas dos décadas, la ecología política se expandió hacia debates globales como el cambio climático, la energía, el extractivismo y las transiciones socioecológicas. En América Latina, pensadores como Eduardo Gudynas (2011) y Maristella Svampa (2019) denunciaron el neoextractivismo, caracterizado por la explotación intensiva de minerales, petróleo y monocultivos, incluso bajo gobiernos progresistas.

Asimismo, la corriente decolonial planteó que la crisis ambiental no podía resolverse únicamente con soluciones técnicas occidentales. Arturo Escobar (2015) defendió la necesidad de reconocer la pluralidad de saberes y cosmovisiones, especialmente de pueblos indígenas y campesinos, que ofrecen alternativas al modelo de desarrollo capitalista.

2.3. Conceptos centrales y categorías analíticas

La ecología política se distingue por desarrollar un conjunto de conceptos clave que permiten entender cómo el poder y las desigualdades sociales atraviesan los procesos ecológicos. Estos conceptos no son meros términos académicos, sino herramientas analíticas que permiten visibilizar realidades concretas de opresión, exclusión y resistencia en los territorios.

a) Poder y ambiente

El primero y más importante es el de *poder*, entendido como la capacidad de ciertos actores sociales para imponer sus intereses en la configuración de la naturaleza y en la distribución de los recursos. En este sentido, el ambiente deja de ser un escenario neutral para convertirse en un campo político donde distintos grupos —empresas, Estados, comunidades, organismos internacionales— disputan el acceso y control de los bienes comunes. Por

ejemplo, el control del agua potable en Ciudad de México muestra cómo los intereses inmobiliarios y empresariales suelen imponerse sobre las necesidades de colonias populares, generando desigualdad en el suministro y calidad del recurso. Autores como Bryant y Bailey (1997) han insistido en que el análisis ambiental sin *poder* es insuficiente, pues no permite explicar quién gana y quién pierde en cada disputa ecológica.

b) Conflictos socioambientales

El segundo concepto clave es el de *conflictos socioambientales*, que hace referencia a las disputas abiertas entre actores por el uso, apropiación y gestión de los recursos naturales. Estos conflictos no deben verse como simples enfrentamientos circunstanciales, sino como expresiones de contradicciones estructurales entre modelos de desarrollo y proyectos de vida de las comunidades. Un ejemplo emblemático en América Latina fue la Guerra del Agua en Cochabamba (2000), cuando la privatización del servicio de agua llevó a una revuelta ciudadana que obligó al Estado a revertir la concesión otorgada a una empresa transnacional. Como señala Martínez-Alier (2002), los conflictos ambientales son también conflictos por justicia y dignidad, pues implican el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios.

c) Justicia ambiental

El concepto de *justicia ambiental* amplía la mirada al incorporar no sólo la distribución equitativa de cargas y beneficios ambientales, sino también la participación política y el reconocimiento cultural. De acuerdo con Robert Bullard (1993), no se trata únicamente de que los impactos ambientales se repartan de manera más justa, sino de que las comunidades históricamente excluidas tengan voz y capacidad de decisión en los procesos que afectan a su vida cotidiana. En la práctica, esto significa garantizar que los pueblos indígenas, comunidades campesinas y barrios populares puedan incidir en las políticas urbanas, rurales y ambientales.

d) Escalas y territorialidad

Un cuarto concepto central es el de *escala*, que destaca la necesidad de analizar los problemas ambientales en múltiples niveles: local, regional, nacional

y global. Una disputa por la construcción de una represa en Brasil, por ejemplo, no se limita al ámbito local, sino que involucra intereses nacionales de generación eléctrica y compromisos internacionales en materia energética. Peet y Watts (1996) sostienen que la ecología política debe considerar estas conexiones multiescalares para comprender cómo los procesos globales, como el comercio internacional o las políticas de organismos multilaterales, impactan en los territorios concretos.

a) Acumulación por desposesión

Finalmente, el concepto de *acumulación por desposesión*, desarrollado por David Harvey (2004), es central para entender cómo el capitalismo mercantiliza continuamente la naturaleza. La tierra, el agua, los bosques o incluso el aire se convierten en mercancías a través de procesos de privatización y despojo. En el ámbito urbano, esto se refleja en la gentrificación: barrios populares son transformados en zonas de alto valor inmobiliario, expulsando a los residentes originales y apropiándose de los espacios comunes para convertirlos en negocios privados.

En conjunto, estas categorías muestran que la ecología política no se limita a describir problemas ambientales, sino que busca comprenderlos como parte de relaciones estructurales de poder y desigualdad.

2.4. Metodologías en la ecología política

La ecología política no sólo aporta categorías teóricas, sino también un enfoque metodológico innovador. Se caracteriza por combinar métodos de distintas disciplinas — geografía, antropología, sociología, economía política— con el objetivo de comprender la complejidad de los procesos socioecológicos.

a) Investigación cualitativa

La etnografía, las entrevistas y las historias de vida son fundamentales para captar la experiencia de las comunidades afectadas. Por ejemplo, en estudios sobre barrios marginados en São Paulo, la etnografía ha permitido documentar cómo la falta de áreas verdes impacta la salud y las

dinámicas sociales de los habitantes, algo que no podría captarse únicamente con estadísticas.

b) Análisis espacial y cartografía crítica

El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) se ha vuelto esencial para mapear desigualdades territoriales. Los estudios de Nik Heynen (2006) sobre Atlanta, por ejemplo, mostraron cómo los barrios afroamericanos tenían significativamente menos áreas verdes que los barrios blancos de clase alta. Esta visualización espacial permitió demostrar de manera concreta la existencia de injusticia ambiental.

c) Historia ambiental

El análisis histórico permite reconstruir cómo se han configurado los paisajes a lo largo del tiempo. En México, por ejemplo, los estudios de historia ambiental han mostrado cómo la urbanización del Valle de México estuvo marcada por el desecamiento sistemático de lagos, una decisión política que transformó profundamente la relación sociedad-naturaleza y generó problemas actuales de hundimientos y escasez de agua.

d) Estudios multiescalares

La ecología política reconoce que ningún problema ambiental se limita a una sola escala. Por ello, se realizan estudios que conectan decisiones globales con efectos locales. Un ejemplo es el análisis de cómo los tratados de libre comercio condicionan las políticas agrícolas nacionales, generando impactos en comunidades rurales que terminan desplazadas hacia ciudades donde enfrentan nuevos problemas socioambientales.

e) Investigación-acción participativa

Inspirada en las pedagogías críticas de Paulo Freire, la investigación-acción participativa involucra a las comunidades en la producción del conocimiento. No se trata de estudiar a las comunidades como "objetos", sino de generar procesos de co-investigación que fortalezcan sus luchas políticas. Esto ha sido clave en experiencias de defensa del agua en Bolivia y de resistencia a megaproyectos en México.

f) Interdisciplinariedad crítica

A diferencia de la ciencia tradicional, que fragmenta los problemas en disciplinas aisladas, la ecología política propone un enfoque interdisciplinario que combina análisis biofísicos, sociales, económicos y culturales. Esto permite comprender que fenómenos como la contaminación o la pérdida de biodiversidad no son únicamente procesos naturales, sino también sociales y políticos.

En resumen, la metodología de la ecología política no busca la neutralidad, sino que se declara abiertamente crítica y comprometida con la justicia social. Su objetivo no es sólo explicar el mundo, sino transformarlo a través de un conocimiento que sirva a las comunidades y movimientos sociales.

2.5. Debates y críticas dentro de la ecología política

A lo largo de su desarrollo, la ecología política no ha estado exenta de críticas y debates internos. Estas discusiones han contribuido a fortalecerla, pero también han mostrado sus límites y desafíos.

Una primera crítica proviene de quienes consideran que la ecología política tiende a enfatizar excesivamente el conflicto, lo que podría llevar a invisibilizar experiencias de cooperación o gestión comunitaria exitosa. Si bien es cierto que el enfoque se centra en mostrar las desigualdades y los despojos, algunos investigadores sugieren que también debería prestarse atención a prácticas positivas de manejo de recursos, como los sistemas comunales de riego en Oaxaca, o las experiencias de agroecología en Cuba, que demuestran la capacidad de las comunidades para gestionar de manera sustentable sus territorios.

Otra tensión se encuentra en la relación con la *ecología urbana* y la *ecología industrial*. Mientras la ecología política insiste en que lo fundamental es entender las relaciones de poder, estas disciplinas buscan modelos más técnicos y funcionales, enfocados en flujos de energía, metabolismo urbano o eficiencia tecnológica (Pickett et al., 2011). Algunos ecólogos han señalado que la ecología política corre el riesgo de sobredimensionar lo social y dejar de lado los procesos biofísicos, como la dinámica de ecosistemas urbanos. Sin embargo, los defensores del campo responden que su

valor radica, precisamente, en mostrar que esos flujos biofísicos no son neutrales, sino que están configurados por decisiones políticas.

Los debates también se han dado en torno a la teoría social que sustenta la ecología política. Por un lado, autores como David Harvey sostienen una lectura marxista clásica que coloca al capitalismo como motor central de la degradación ambiental. Por otro lado, autores como Bruno Latour (2005), desde la teoría del actor-red, proponen analizar cómo humanos y no-humanos coexisten en redes híbridas que no pueden reducirse únicamente a relaciones de capital. Esta tensión refleja la riqueza del campo: mientras unos enfatizan la crítica estructural, otros abren horizontes hacia una ontología relacional que incluye a la naturaleza como actor.

Asimismo, la teoría de la modernización ecológica, desarrollada por autores como Ulrich Beck (1992), plantea que es posible enfrentar la crisis ambiental mediante innovación tecnológica, gestión eficiente y políticas de riesgo. Desde la ecología política, sin embargo, se critica esta visión por considerarse ingenua, ya que ignora las desigualdades estructurales y mantiene intacto el modelo capitalista. Para Harvey o Escobar, no basta con "modernizar" el sistema; se requiere transformarlo de raíz.

Un debate interesante se da también con la economía ecológica. Mientras Joan Martínez-Alier ha buscado puentes entre ambas corrientes —especialmente en torno al concepto de conflictos ecológico-distributivos—, algunos economistas ecológicos enfatizan más el cálculo biofísico y la contabilidad energética, mientras que la ecología política privilegia la dimensión del poder y la justicia. Aunque distintas, estas perspectivas se han retroalimentado, mostrando la necesidad de enfoques interdisciplinares.

Finalmente, uno de los debates más vivos se da en América Latina, donde varios autores señalan el riesgo de que la ecología política reproduzca un sesgo eurocéntrico. Enrique Leff (2004), Héctor Alimonda (2011), entre otros, plantean que el campo debe abrirse a las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas, reconociendo que existen múltiples formas de comprender la naturaleza y el territorio. Esta crítica ha dado lugar a una ecología política latinoamericana y decolonial que no sólo cuestiona el capitalismo, sino también las epistemologías occidentales que lo sostienen.

2.6. Aportes latinoamericanos y decoloniales

En América Latina, la ecología política ha encontrado un terreno fértil, pues la región concentra altos niveles de biodiversidad, pero también profundos procesos de desigualdad social y dependencia económica. Aquí, la ecología política se ha nutrido de experiencias de resistencia y de aportes teóricos propios, lo que le ha permitido desarrollar una identidad diferenciada frente a la tradición anglosajona.

Uno de los principales aportes proviene de Enrique Leff (2004), quien introdujo la noción de racionalidad ambiental. Para Leff, la crisis ecológica no puede resolverse con más ciencia técnica ni con soluciones de mercado, sino mediante un cambio civilizatorio que cuestione las bases del pensamiento moderno-occidental. Propone un diálogo de saberes entre conocimientos científicos, locales e indígenas, que permita construir alternativas sustentables enraizadas en los territorios.

Por su parte, Eduardo Gudynas (2011) y Alberto Acosta (2010) han impulsado el paradigma del Buen Vivir (*Sumak Kawsay*), inspirado en cosmovisiones andinas. Este paradigma no concibe a la naturaleza como un recurso a explotar, sino como una entidad con derechos propios con la que las comunidades deben establecer relaciones de reciprocidad y cuidado. Estas ideas tuvieron eco en la Constitución de Ecuador (2008), que reconoció por primera vez los derechos de la naturaleza, y en la de Bolivia, que incorporó el Vivir Bien como principio rector.

Maristella Svampa (2019), desde la sociología crítica, ha estudiado el modelo neoextractivista en América Latina caracterizado por la explotación intensiva de minerales, petróleo y monocultivos, muchas veces bajo gobiernos progresistas que justificaron estas actividades como fuente de ingresos para programas sociales. Svampa advierte que este modelo reproduce la dependencia de los países latinoamericanos respecto a la exportación de materias primas, generando a la vez graves conflictos socioambientales.

Otro aporte importante ha sido la articulación de la ecología política con los movimientos sociales. En países como México, Perú, Colombia y Brasil, los pueblos indígenas y campesinos han protagonizado luchas contra megaproyectos mineros, hidroeléctricos y urbanos. Estos movimientos no

sólo defienden recursos naturales, sino también formas de vida, culturas e identidades. Su resistencia ha alimentado la teoría con conceptos como territorio, autonomía, comunalidad y defensa de la vida, ampliando el horizonte de la ecología política más allá del marxismo clásico.

Finalmente, autores como Héctor Alimonda (2011) han planteado una ecología política decolonial que busca comprender cómo el colonialismo histórico y sus prolongaciones actuales han configurado la relación de América Latina con la naturaleza. Desde esta perspectiva, la crisis ambiental no puede entenderse sin reconocer la persistencia del colonialismo, el racismo y el patriarcado en la región.

Estos aportes muestran que la ecología política latinoamericana no es una mera "adaptación" de teorías del norte, sino un campo original, con contribuciones únicas que han enriquecido el debate global.

2.7. Metabolismo urbano desigual: agua, energía, alimentos, residuos y transformaciones del paisaje

El concepto de paisaje urbano no se limita a la descripción física de la ciudad, sus edificios y calles. Implica también un horizonte simbólico y perceptual donde los sujetos construyen significados y experiencias en torno al espacio habitado. Comprender el paisaje urbano exige, por tanto, articular enfoques de las ciencias sociales, la filosofía y la geografía humanista que destaquen la dimensión vivencial y cultural del espacio.

El paisaje no es un mero escenario neutro: es un texto social cargado de símbolos, memorias y relaciones de poder. Autores como Cosgrove (1984) y Duncan (1990) lo conciben como una forma de representación cultural, mientras que la geografía fenomenológica lo entiende como un espacio de experiencia existencial (Relph, 1976).

La fenomenología, inspirada en Heidegger (1951) y su noción de "el habitar", ha influido en la manera de entender el paisaje urbano como un espacio donde la vida se enraíza. Heidegger planteaba que habitar no es simplemente residir, sino "ser en el mundo", construir un sentido de pertenencia.

Desde esta perspectiva, el paisaje urbano debe analizarse a partir de cómo los sujetos experimentan el lugar: los recorridos cotidianos, los espacios de

encuentro, la memoria inscrita en una calle o un barrio. La geografía fenomenológica, representada por Relph (1976) y Tuan (1977), introdujo conceptos como *topofilia* (el vínculo afectivo con el lugar) y *topofobia* (el rechazo o miedo hacia ciertos espacios).

Por ejemplo, un barrio puede ser percibido simultáneamente como hogar para sus habitantes y como espacio peligroso para los forasteros. Esta ambivalencia revela que el paisaje urbano está mediado por emociones, identidades y representaciones sociales.

El paisaje urbano es también un repositorio de memorias colectivas. Como señala Halbwachs (1950), la memoria social se inscribe en el espacio, en monumentos, plazas, edificios y calles que remiten a experiencias compartidas.

En Ciudad de México, el Zócalo funciona no sólo como espacio físico, sino como símbolo de la historia nacional: escenario de movimientos políticos, celebraciones populares y expresiones culturales. En Berlín, el Muro y sus restos son parte de un paisaje cargado de memoria y trauma.

Estos ejemplos muestran que el paisaje urbano es una construcción histórica donde se sedimentan capas de significado. La planificación urbana no puede ignorar esta dimensión simbólica sin correr el riesgo de borrar identidades colectivas.

La geografía humanista aporta un enfoque centrado en la experiencia subjetiva y en la manera en que los individuos se apropian del espacio. Yi-Fu Tuan (1977) argumentaba que el espacio se convierte en lugar cuando adquiere significado para quienes lo habitan.

Esta transformación depende de prácticas cotidianas: caminar, conversar, comerciar, jugar. En este sentido, los parques, las plazas y los mercados son más que infraestructuras: son escenarios de interacción social que consolidan el sentido de comunidad.

Un ejemplo latinoamericano es la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, Argentina, que se convirtió en símbolo político gracias a las protestas de las Madres de Plaza de Mayo. Allí, el espacio urbano se resignificó como territorio de resistencia y memoria.

Los enfoques fenomenológicos y humanistas muestran que el paisaje urbano no puede reducirse a su dimensión física o económica. Es un espacio vivido, cargado de significados, emociones y memorias colectivas.

Comprenderlo exige atender cómo los sujetos lo habitan, lo experimentan y lo resignifican en sus prácticas cotidianas.

2.8. Paisaje urbano, poder simbólico e imaginarios culturales: memoria, narrativas y apropiaciones del espacio

Desde la perspectiva cultural, el paisaje urbano no es únicamente un entorno material, sino también una representación producida por prácticas sociales, políticas y artísticas. Cosgrove (1984) planteó que el paisaje debe entenderse como una forma de ver el mundo, un modo de representación en el que se condensan ideologías, valores y jerarquías de poder.

En el contexto urbano, esta noción implica que los edificios, plazas y monumentos no sólo cumplen funciones utilitarias, sino que transmiten significados simbólicos. La arquitectura monumental del Estado, las estatuas en espacios públicos o los murales comunitarios son formas de inscribir narrativas sobre la identidad, el poder y la pertenencia.

Un claro ejemplo es el urbanismo monumental del fascismo en Roma o el urbanismo socialista en Moscú, donde la disposición del espacio buscaba reflejar un orden político e ideológico. En América Latina, proyectos como el Eje Central, en Ciudad de México, o la Avenida de Mayo, en Buenos Aires, fueron diseñados como símbolos de modernidad y progreso, pero también como escenarios de control y representación estatal.

El paisaje urbano puede leerse también como un instrumento de poder simbólico. Según Bourdieu (1991), el poder se ejerce no sólo a través de la coerción física, sino también mediante la producción de significados y percepciones. En este sentido, el espacio urbano funciona como un dispositivo que legitima o naturaliza jerarquías sociales.

Los barrios de élite con arquitectura neoclásica o contemporánea proyectan prestigio y estatus, mientras que los barrios periféricos son asociados con precariedad e informalidad. Esta diferenciación simbólica contribuye a reproducir desigualdades, pues influye en cómo se perciben los territorios y en las políticas que se les destinan.

Un ejemplo concreto es la urbanización cerrada (*gated communities*) en ciudades como São Paulo, Monterrey o Miami. Estos espacios no sólo

constituyen enclaves de seguridad y exclusividad, sino que transmiten un mensaje simbólico de segregación: la ciudad fragmentada en espacios de privilegio y espacios de exclusión.

Los imaginarios urbanos son representaciones colectivas que influyen en cómo se concibe y se vive la ciudad. Autores como Castoriadis (1997) y Silva (2006) destacan que los imaginarios son fuerzas instituyentes, capaces de moldear prácticas sociales y políticas.

En la ciudad, los imaginarios se expresan en narrativas sobre modernidad, seguridad, tradición o cosmopolitismo. Por ejemplo, Ciudad de México ha sido imaginada como "la gran Tenochtitlan" en el discurso nacionalista, como metrópoli moderna en los años setenta, y hoy como una "ciudad global" que compite en redes internacionales de turismo y negocios.

En Barcelona, el imaginario de "ciudad creativa" y "capital del diseño" ha influido en la transformación urbana, orientando inversiones hacia sectores culturales y turísticos. Sin embargo, este imaginario también ha generado tensiones con barrios tradicionales que resisten la turistificación y la especulación inmobiliaria.

Los imaginarios urbanos no son neutros: reflejan relaciones de poder y disputas simbólicas. Los medios de comunicación, la publicidad y el cine contribuyen a reforzar ciertos imaginarios —como el de la ciudad cosmopolita—, mientras que movimientos sociales generan contraimaginarios que denuncian desigualdad, violencia o exclusión. Además de las narrativas oficiales y mediáticas, la cultura popular juega un papel crucial en la construcción simbólica del paisaje urbano. Festividades, mercados, murales, grafitis y expresiones artísticas transforman los espacios en escenarios cargados de significados.

En Oaxaca, la Guelaguetza convierte las calles en territorios de identidad indígena y resistencia cultural. En Río de Janeiro, el carnaval resignifica temporalmente la ciudad, apropiando avenidas y plazas como escenarios de fiesta y reivindicación.

En Ciudad de México, los murales de Siqueiros, Rivera y Orozco no sólo decoraron edificios, sino que produjeron un paisaje urbano cargado de ideología nacionalista y crítica social. Más recientemente, el grafiti y el arte urbano han convertido colonias como Tepito o la Roma en territorios de expresión cultural y política.

El paisaje urbano es también un campo de disputa de memorias colectivas. En muchas ciudades se debate si mantener estatuas de colonizadores, dictadores o esclavistas, o sustituirlas por monumentos que representen luchas sociales y diversidad cultural.

En Estados Unidos, el movimiento *Black Lives Matter* impulsó la remoción de estatuas confederadas en ciudades del sur, resignificando el espacio público en clave antirracista. En Chile, las protestas de 2019 transformaron la Plaza Italia en "Plaza Dignidad", resignificando el lugar como símbolo de resistencia.

Estos procesos muestran que el paisaje urbano es dinámico: no sólo refleja el poder, sino que puede ser reconfigurado por los movimientos sociales para expresar memorias y aspiraciones colectivas.

2.9. Teoría urbana crítica: producción del espacio, urbanización del capital, movimientos sociales y ecologías políticas en perspectivas latinoamericanas y europeas

Durante gran parte del siglo XX, los estudios urbanos estuvieron dominados por perspectivas funcionalistas y tecnocráticas que concebían la ciudad como un sistema de servicios e infraestructuras. Sin embargo, a partir de los años sesenta emergió un giro crítico que replanteó el análisis de la ciudad desde una mirada política y social.

Este giro estuvo profundamente influenciado por el marxismo y por la crítica a la modernización. Autores como Lefebvre (1968), Harvey (1973) y Castells (1977) argumentaron que el espacio urbano no es un simple escenario neutro, sino un producto social atravesado por relaciones de poder y procesos de acumulación de capital.

La geografía crítica, consolidada en los años setenta y ochenta, denunció que la planificación urbana dominante favorecía a las élites y reproducía desigualdades estructurales. En este marco, el paisaje urbano pasó a entenderse como resultado de procesos históricos de dominación y resistencia.

El filósofo francés Henri Lefebvre es considerado uno de los pensadores más influyentes en el estudio del paisaje urbano. En su obra, *La producción del espacio* (1974), planteó que el espacio no es un contenedor pasivo, sino una construcción social producida por prácticas, relaciones y significados.

Lefebvre propuso una tríada espacial:

1. Prácticas espaciales: el uso cotidiano del espacio (movilidad, vivienda, trabajo).
2. Representaciones del espacio: la manera en que planificadores, arquitectos y técnicos conciben y diseñan la ciudad.
3. Espacios de representación: los significados simbólicos y vivenciales que las comunidades atribuyen al espacio.

Esta tríada permite comprender que el paisaje urbano resulta de tensiones entre prácticas cotidianas, proyectos técnicos y sentidos culturales. Por ejemplo, una plaza puede ser concebida por el gobierno como "espacio de orden", pero apropiada por los ciudadanos como lugar de protesta o convivencia.

El aporte de Lefebvre trasciende lo teórico: su noción del derecho a la ciudad se convirtió en bandera de movimientos sociales y en marco para repensar la justicia urbana.

El geógrafo David Harvey profundizó el enfoque marxista en la teoría urbana, mostrando cómo la ciudad es central en la dinámica del capitalismo. En *Social Justice and the City* (1973) y *The Urbanization of Capital* (1985), Harvey argumenta que el capital utiliza la urbanización como estrategia para resolver sus crisis de sobreacumulación.

Esto implica que el paisaje urbano no es sólo producto de decisiones técnicas, sino de la necesidad del capital de encontrar nuevos espacios de inversión. La construcción de viviendas, autopistas o centros comerciales no responde únicamente a necesidades sociales, sino a la lógica de la especulación y la acumulación. Un ejemplo claro fue la renovación urbana en Nueva York bajo Robert Moses, donde la construcción de autopistas y grandes proyectos inmobiliarios desplazó a miles de familias pobres para abrir espacio a la inversión privada. Harvey interpreta estos procesos como expresiones de la acumulación por desposesión, dinámica que se repite en América Latina con megaproyectos urbanos que expulsan a comunidades populares.

El sociólogo Manuel Castells aportó una perspectiva distinta al enfatizar el papel de los movimientos sociales urbanos en la producción del

espacio. En *La cuestión urbana* (1977), argumentó que los conflictos urbanos no giran únicamente en torno a la producción de plusvalía, sino también en torno al acceso a servicios colectivos como vivienda, transporte y educación.

Castells mostró que las luchas urbanas no deben reducirse a expresiones secundarias del conflicto de clases, sino que constituyen una dimensión central de la política contemporánea. Los movimientos por el derecho a la vivienda, por el derecho al agua o contra los desalojos son parte de la disputa por el modelo de ciudad.

En América Latina, los movimientos vecinales en Ciudad de México o São Paulo, así como los movimientos contra la privatización del agua en Cochabamba, ilustran la relevancia de la perspectiva de Castells.

La geografía crítica amplió estos debates al exponer cómo la urbanización es un proceso desigual y combinado que refleja las contradicciones del capitalismo global. Autores como Neil Smith (1984) introdujeron el concepto de *producción desigual del espacio* para explicar por qué algunos barrios se valorizan mientras otros se degradan, generando fenómenos como la gentrificación.

La ecología política en diálogo con la geografía crítica subrayó que estas desigualdades no son sólo económicas, sino también ambientales. La distribución de áreas verdes, contaminación o acceso al agua revela cómo el paisaje urbano concentra injusticias socioecológicas.

Un ejemplo en América Latina es el contraste entre Santa Fe (Ciudad de México)—un enclave financiero de alta tecnología— y los barrios populares de Álvaro Obregón que rodean el complejo; donde la falta de servicios básicos contrasta con los rascacielos de lujo. Este "paisaje de contrastes" refleja la producción desigual del espacio en clave neoliberal.

En América Latina, la perspectiva crítica ha sido aplicada al análisis de megaproyectos urbanos como el Nuevo Aeropuerto de Texcoco (NAICM), en México, o la urbanización de la Vila Autódromo en Río de Janeiro para los Juegos Olímpicos de 2016. Ambos casos muestran cómo la lógica de acumulación por desposesión desplaza comunidades para abrir espacio a inversiones globales.

En Europa, los estudios críticos han analizado procesos como la transformación de Berlín tras la reunificación, donde el capital inmobiliario

convirtió antiguos barrios populares en espacios de especulación y gentrificación. En Madrid, el proyecto Madrid Río generó un paisaje urbano atractivo, pero desplazó también a sectores populares y elevó los costos de la vivienda.

Estos ejemplos confirman que la teoría crítica ofrece herramientas para comprender cómo el paisaje urbano es producto de tensiones entre acumulación de capital, planificación estatal y resistencias sociales.

3. Capitalismo, poder y producción desigual del paisaje urbano. Introducción al concepto de producción del espacio urbano

El paisaje urbano no puede comprenderse únicamente como un conjunto de edificios, calles y parques organizados bajo una lógica técnica o estética. Lejos de esa visión simplista, el paisaje urbano es el resultado histórico de procesos sociales, políticos y económicos que han dado forma a la ciudad. Cada avenida, cada barrio y cada espacio público reflejan no sólo decisiones de planeación, sino también relaciones de poder, luchas sociales y proyectos de dominación.

Uno de los principales aportes teóricos en este campo provino de Henri Lefebvre, quien en *La producción del espacio* (1974) planteó que el espacio no es un contenedor neutro donde ocurren los fenómenos sociales, sino un producto social, configurado históricamente por prácticas, imaginarios y relaciones de poder. Para Lefebvre, la ciudad moderna es el escenario donde el capital se expande mediante la urbanización, generando espacios funcionales al mercado y excluyendo a quienes no se ajustan a sus lógicas.

Este planteamiento permite comprender que la producción del paisaje urbano está directamente vinculada con los procesos de acumulación capitalista. David Harvey (1985) retomó esta idea para mostrar cómo las crisis periódicas del capitalismo se resuelven a través de la inversión en infraestructura urbana. Las ciudades se convierten en depósitos de capital excedente: autopistas, puentes, centros comerciales y complejos residenciales no sólo responden a necesidades sociales, sino que son estrategias para absorber inversiones y generar ganancias.

En este sentido, la urbanización no es un proceso natural ni inevitable, sino una estrategia política y económica que moldea el territorio de acuerdo con los intereses de las élites. La distribución desigual de servicios, la localización de la industria, la construcción de fraccionamientos de lujo y la marginación de barrios periféricos son parte de este mismo proceso.

Ejemplos abundan en América Latina. La expansión de la Ciudad de México hacia el norte y oriente ha estado marcada por una fuerte desigualdad: mientras las zonas como Santa Fe y Polanco concentran inversiones inmobiliarias, centros corporativos y servicios de alto nivel, en municipios periféricos como Ecatepec o Chimalhuacán predominan viviendas autoconstruidas, déficit de servicios y graves problemas de inseguridad. Así, el paisaje urbano materializa la brecha social.

La noción de *producción desigual del paisaje* también se observa en ciudades europeas y norteamericanas. En Nueva York, por ejemplo, procesos de gentrificación han transformado barrios históricamente obreros o migrantes en zonas de alto valor inmobiliario, expulsando a los habitantes originales. El espacio urbano, lejos de ser un "bien común", se convierte en mercancía sujeta a especulación.

En síntesis, la producción desigual del paisaje urbano responde a la interacción entre el capitalismo, el Estado y los movimientos sociales. Es en esta tensión donde se configuran los espacios urbanos, que al mismo tiempo expresan las desigualdades y las luchas por el derecho a la ciudad.

3.1. Capitalismo y urbanización

El capitalismo ha encontrado en la urbanización una vía privilegiada para expandirse y resolver sus crisis. Harvey (2008) explica que las ciudades funcionan como "esponjas" que absorben capital excedente, convirtiéndolo en infraestructura y bienes raíces. De esta forma, la urbanización no sólo crea espacios físicos, sino que también garantiza la reproducción del sistema económico.

La relación entre capitalismo y ciudad se evidencia en tres procesos principales:

1. La mercantilización del suelo urbano: La tierra se convierte en un bien sujeto a la especulación. Su valor ya no depende únicamente de su ubicación o características, sino de las expectativas de inversión. Esto genera fenómenos como la burbuja inmobiliaria, que afectan tanto a países desarrollados como a emergentes.
2. La privatización de lo público: Espacios que antes eran de uso colectivo, como parques, playas o áreas de recreación, son cerrados y convertidos en servicios privados. Esto se observa en la proliferación de centros comerciales y fraccionamientos cerrados, que sustituyen al espacio público como lugar de encuentro social.
3. La segregación socioespacial: El capitalismo urbano produce ciudades fragmentadas, donde coexisten zonas de riqueza extrema con cinturones de pobreza. En São Paulo, por ejemplo, los barrios de lujo como Jardins contrastan con las favelas que carecen de servicios básicos. Esta desigualdad espacial reproduce y profundiza la desigualdad social.

Un elemento central en este análisis es la noción de *acumulación por desposesión*. La construcción de grandes infraestructuras, la expansión de corredores financieros y los megaproyectos de renovación urbana implican, muchas veces, el desplazamiento de comunidades enteras. Este fenómeno no es exclusivo del Sur Global: en Estados Unidos, proyectos como la construcción de autopistas urbanas en los años cincuenta destruyeron barrios afroamericanos, generando despojo y desplazamiento forzado.

La lógica capitalista también se expresa en la financiarización de la vivienda. En ciudades como Madrid o Barcelona, fondos de inversión internacionales han adquirido grandes cantidades de viviendas para destinarlas al alquiler turístico, encareciendo los precios y expulsando a residentes de bajos ingresos. El espacio urbano se convierte así en un activo financiero, más que en un derecho ciudadano.

3.2. Estado, planificación urbana y políticas públicas

Aunque el capitalismo es un motor fundamental en la configuración desigual de las ciudades, no actúa de manera aislada. El Estado desempeña un

papel central en la producción del paisaje urbano, ya sea como regulador, como promotor del desarrollo o incluso como actor que favorece a las élites económicas. La planificación urbana, lejos de ser un proceso técnico neutral, se convierte en un campo de disputa política donde se definen qué sectores sociales tendrán acceso a infraestructura, transporte, vivienda y servicios, y cuáles serán relegados a la periferia.

En América Latina, los planes de urbanización del siglo XX reflejaron esta lógica. En México, la expansión de la Ciudad de México estuvo marcada por políticas que favorecieron la construcción de fraccionamientos para clases medias y altas, mientras las clases populares debieron recurrir a la autoconstrucción en zonas periféricas. Estudios de Ward (1999) sobre la vivienda en México muestran cómo los programas oficiales ignoraron sistemáticamente a los pobres urbanos, consolidando una ciudad dual donde conviven barrios modernos con colonias populares carentes de servicios.

El Estado también interviene a través de grandes megaproyectos de infraestructura. Estos proyectos, presentados bajo el discurso del progreso, suelen implicar despojo territorial y desplazamiento. El caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM) en Texcoco es ilustrativo: su construcción fue justificada en nombre del desarrollo nacional, pero implicaba la destrucción de humedales, el despojo de ejidatarios y un alto costo social y ambiental (Carabias y Provencio, 2018). Aunque el proyecto fue cancelado en 2018 tras intensas protestas, la disputa mostró cómo el Estado puede ser actor directo en la producción desigual del espacio urbano.

En el ámbito internacional, la influencia de organismos financieros como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional también ha moldeado las políticas urbanas. Durante los años ochenta y noventa, las políticas de ajuste estructural impulsaron la privatización de servicios básicos, incluyendo agua, transporte y vivienda. En Cochabamba, Bolivia, la concesión del servicio de agua a la empresa Bechtel desencadenó la "Guerra del Agua" en el año 2000, un ejemplo paradigmático de resistencia ciudadana frente a la mercantilización de un recurso vital.

En Europa y Estados Unidos, el Estado ha favorecido también procesos de segregación. Durante los años cincuenta y sesenta, la construcción de

autopistas urbanas en ciudades como Detroit y Nueva York implicó la destrucción de barrios afroamericanos y de clase trabajadora, generando desplazamientos masivos (Jacobs, 1961). De manera similar, en Francia, la construcción de los *grands ensembles* en las periferias parisinas, en los años sesenta, creó grandes complejos habitacionales destinados a trabajadores inmigrantes, que con el tiempo se convirtieron en zonas de exclusión social.

En síntesis, el Estado no es un simple árbitro en la disputa urbana: es un agente activo en la producción del paisaje desigual, ya sea a través de la planeación, la inversión en infraestructura o la promoción de modelos neoliberales de ciudad.

3.3. Gentrificación y mercantilización del espacio urbano

Uno de los fenómenos más estudiados en la ecología política urbana contemporánea es la *gentrificación*, entendida como el proceso mediante el cual barrios populares o de clase trabajadora son transformados en zonas de alto valor inmobiliario, expulsando a sus habitantes originales para dar paso a nuevos residentes de mayores ingresos.

El concepto fue introducido por Ruth Glass (1964) al analizar el proceso en Londres, cuando barrios obreros comenzaron a ser ocupados por clases medias profesionales que rehabilitaban viviendas antiguas. Desde entonces, la gentrificación se ha convertido en un fenómeno global, presente tanto en ciudades del Norte Global como en América Latina, Asia y África.

La gentrificación refleja la mercantilización del espacio urbano: la vivienda deja de concebirse como un derecho para convertirse en un activo financiero. Esto se observa en ciudades como Nueva York, donde barrios históricamente afroamericanos y latinos como Harlem o Brooklyn han sido transformados por la llegada de nuevos residentes, con un incremento acelerado en el costo de vida. Lo mismo ocurre en Barcelona, donde el auge del turismo y de plataformas como Airbnb ha convertido barrios tradicionales en espacios turísticos, expulsando a los habitantes locales (Cocola-Gant, 2016).

En América Latina, los procesos de gentrificación han adquirido características propias. En Ciudad de México, colonias como la Roma y la Condesa han experimentado una revalorización inmobiliaria asociada a la llegada de capital extranjero, restaurantes *gourmet* y proyectos culturales. Sin embargo, este "renacimiento urbano" ha significado la expulsión de inquilinos tradicionales y el encarecimiento de los servicios. Algo similar ocurre en Santiago de Chile, donde barrios centrales se han transformado bajo políticas de renovación urbana que privilegian a sectores de altos ingresos.

La gentrificación también se vincula con fenómenos de "gentrificación verde", en los que proyectos ambientales y de recuperación ecológica terminan generando procesos de exclusión. En Madrid, el proyecto Madrid Río, que transformó la ribera del río Manzanares en un parque lineal, revalorizó el suelo circundante y aceleró la expulsión de habitantes de bajos ingresos. De igual forma, en Nueva York, la recuperación de la High Line generó un *boom* inmobiliario en el barrio de Chelsea, elevando los precios de vivienda y desplazando a residentes de larga *data*.

Este fenómeno plantea una paradoja: proyectos que en apariencia buscan mejorar la calidad de vida y generar sustentabilidad terminan convirtiéndose en motores de exclusión. Así, la ecología política muestra que incluso las políticas "verdes" pueden reproducir desigualdades si no se acompañan de mecanismos de justicia social.

Más allá de la gentrificación, la mercantilización del espacio urbano se observa también en la proliferación de fraccionamientos cerrados y megacentros comerciales. En São Paulo, Buenos Aires o Monterrey, la expansión de "barrios privados" con seguridad y servicios exclusivos genera un paisaje urbano fragmentado, donde lo público se reduce y lo privado se expande. La ciudad se convierte en un mosaico de enclaves, con barreras físicas y simbólicas que refuerzan la segregación.

Finalmente, la financiarización global ha transformado la vivienda en un activo especulativo. Fondos internacionales compran edificios completos para destinarlos a renta temporal, elevando los precios y excluyendo a amplios sectores. La ciudad se convierte en una mercancía globalizada donde los derechos ciudadanos son subordinados a las dinámicas del capital.

3.4. Segregación socioespacial y periferias urbanas

La *segregación socioespacial* es una de las expresiones más visibles de la producción desigual del paisaje urbano. Este fenómeno se refiere a la separación de la población en distintos espacios de la ciudad en función de variables como clase social, ingreso, etnicidad o raza. La segregación no es un resultado natural de la dinámica urbana, sino el producto de políticas públicas, decisiones de mercado y relaciones de poder que estructuran el territorio.

En ciudades latinoamericanas, la segregación se manifiesta en la coexistencia de zonas de alto ingreso, fuertemente vigiladas y con abundancia de servicios, frente a amplias periferias empobrecidas caracterizadas por la autoconstrucción y la carencia de equipamiento urbano. Sabatini (2006) ha documentado cómo en Santiago de Chile los patrones de segregación se profundizaron en las últimas décadas con la expansión de barrios cerrados en sectores acomodados y la relegación de población vulnerable a las periferias urbanas.

La periferización de la pobreza es una de las dinámicas más comunes. En Ciudad de México, la expansión urbana hacia municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl o Chimalhuacán respondió a la exclusión de los sectores populares de los mercados formales de vivienda. Al no poder acceder a créditos o programas oficiales, las familias se asentaron en terrenos irregulares, frecuentemente en zonas de riesgo. Con el tiempo, estas periferias crecieron hasta conformar cinturones urbanos gigantescos, caracterizados por la precariedad laboral, la violencia y la falta de servicios públicos.

En Brasil, el fenómeno de las favelas muestra otro rostro de la segregación. Surgidas como asentamientos informales en las periferias de Río de Janeiro y São Paulo, las favelas concentran millones de habitantes en condiciones de vulnerabilidad. Aunque en muchos casos han desarrollado dinámicas de organización comunitaria, siguen siendo estigmatizadas y relegadas de las políticas urbanas. Investigaciones de Caldeira (2000) sobre São Paulo muestran cómo la fragmentación urbana genera enclaves de riqueza y enclaves de pobreza separados por muros, rejas y seguridad privada, lo que reproduce la exclusión social.

La segregación también se expresa en ciudades del Norte Global. En Estados Unidos, la *redlining* (práctica de negar créditos hipotecarios a barrios afroamericanos) contribuyó durante décadas a la exclusión racial y espacial. En París, la concentración de inmigrantes en las *banlieues* (suburbios periféricos) muestra cómo la segregación se vincula no sólo a ingresos, sino también a factores culturales y étnicos.

En términos simbólicos, la segregación construye una ciudad dividida entre "ciudadanos plenos" que disfrutan de infraestructura, servicios y seguridad, y "ciudadanos de segunda" que habitan periferias carentes de lo básico. Desde la ecología política, esto refleja cómo las desigualdades sociales se materializan en el territorio urbano, produciendo paisajes fragmentados.

3.5. Impactos socioambientales de la desigualdad urbana

La producción desigual del paisaje urbano no sólo genera segregación social, sino también impactos socioambientales profundos. La forma en que se distribuyen los recursos, las infraestructuras y los servicios determina quiénes disfrutan de un ambiente sano y quiénes cargan con los costos de la degradación.

Uno de los impactos más evidentes es la desigualdad en el acceso a áreas verdes y espacios públicos. Estudios en ciudades como Atlanta (Heynen, 2006) y Los Ángeles (Boone et al., 2009) han demostrado que los barrios de bajos ingresos y con mayor población afroamericana o latina tienen menos acceso a parques, lo que repercute en la salud física y mental de los habitantes. En Ciudad de México, colonias del poniente disfrutan de parques arbolados y áreas de recreación, mientras que en la zona oriente predominan calles pavimentadas sin árboles, lo que genera condiciones de mayor vulnerabilidad frente a fenómenos como las islas de calor urbano.

La contaminación es otro ejemplo de injusticia socioambiental. Las zonas industriales, los tiraderos de basura y las autopistas suelen ubicarse cerca de comunidades populares. En Monterrey, por ejemplo, los barrios obreros del norte concentran industrias pesadas que generan contaminación atmosférica, mientras que las zonas residenciales de élite en el sur gozan de mejor calidad del aire. En Lima, Perú, las comunidades asentadas en la

periferia enfrentan niveles alarmantes de contaminación del agua y del aire debido a la cercanía con basureros y fábricas.

Los riesgos urbanos también se distribuyen de manera desigual. Las familias pobres suelen asentarse en laderas, cauces de ríos o zonas de hundimiento, lugares más propensos a inundaciones, deslizamientos o sismos. Tras el terremoto de 1985 en Ciudad de México, quedó en evidencia que las viviendas más vulnerables eran las construidas en condiciones precarias en colonias populares. De manera similar, los huracanes en el Caribe afectan con mayor dureza a quienes carecen de vivienda sólida o de redes de apoyo estatal.

La desigualdad urbana también tiene impactos en la salud pública. Los barrios sin acceso a agua potable o con sistemas de drenaje deficientes enfrentan mayores tasas de enfermedades gastrointestinales y respiratorias. En contraste, las zonas de altos ingresos tienen acceso a hospitales privados, aire más limpio y espacios recreativos que favorecen la calidad de vida. Esta brecha ambiental reproduce las desigualdades sociales y se traduce en una mayor esperanza de vida para quienes habitan barrios privilegiados.

La ecología política urbana señala que estos impactos no son accidentales: responden a una lógica estructural en la que los costos ambientales son desplazados hacia los sectores más pobres. Este fenómeno se conoce como *injusticia ambiental* y ha sido ampliamente documentado por Martínez-Alier (2002), quien sostiene que los conflictos ecológico-distributivos son una expresión de la desigualdad global.

Finalmente, los impactos socioambientales no sólo afectan a quienes viven en condiciones de marginación, sino a la ciudad en su conjunto. La falta de planeación integral genera ciudades insustentables, con altos niveles de contaminación, congestión vehicular y pérdida de biodiversidad. En este sentido, la producción desigual del paisaje urbano no es sólo un problema ético o político, sino también una amenaza a la viabilidad ecológica de las ciudades del futuro.

3.6. Procesos de resistencia urbana y derecho a la ciudad

Frente a la producción desigual del paisaje urbano, no sólo existen procesos de despojo, segregación y mercantilización, sino también formas de resistencia

social que disputan el derecho a la ciudad. Estas resistencias se manifiestan en múltiples escalas: desde movimientos vecinales que defienden un parque, hasta organizaciones transnacionales que luchan contra megaproyectos.

El concepto de *derecho a la ciudad*, formulado por Henri Lefebvre (1968) y retomado por David Harvey (2008), constituye uno de los ejes centrales de estas luchas. Lefebvre planteaba que el derecho a la ciudad no se limita al acceso físico a los espacios urbanos, sino que implica la capacidad de transformarlos de acuerdo con las necesidades colectivas, y no con la lógica del capital. Para Harvey, el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que permite a los ciudadanos reinventar la vida urbana en oposición al urbanismo neoliberal.

En América Latina, el derecho a la ciudad ha inspirado numerosos movimientos sociales. En Ciudad de México, organizaciones barriales han luchado contra desalojos en zonas céntricas como Tepito, San Hipólito o Doctores, donde los planes de renovación urbana pretendían desplazar a los habitantes tradicionales. Estos movimientos han mostrado que la gentrificación no es un proceso inevitable, sino que puede ser resistido a través de la organización colectiva y la presión política.

En Buenos Aires, la lucha por la Villa 31 es otro ejemplo emblemático. Este asentamiento informal, ubicado en una zona estratégica cercana al puerto y al centro financiero, ha sido históricamente estigmatizado y objeto de intentos de desalojo. Sin embargo, la organización comunitaria ha permitido que sus habitantes resistan y exijan su reconocimiento formal como barrio. Investigaciones de Di Virgilio y Rodríguez (2015) destacan cómo las villas porteñas se han convertido en espacios de disputa política, donde los habitantes ejercen de facto su derecho a la ciudad.

En Brasil, los movimientos de vivienda han tenido un rol destacado. El *Movimento dos Trabalhadores Sem Teto* (MTST) ha protagonizado ocupaciones masivas de terrenos y edificios vacíos en São Paulo, presionando al Estado para implementar políticas de vivienda social. Estas luchas ponen en evidencia la contradicción entre una ciudad llena de inmuebles vacíos —retenidos por la especulación inmobiliaria— y millones de personas sin acceso a vivienda digna.

Las resistencias también adoptan un carácter ecológico y territorial. En Cochabamba, la Guerra del Agua (2000) no sólo fue una protesta contra la

privatización, sino una reivindicación del agua como bien común. En Chile, las movilizaciones contra la construcción de represas en la Patagonia expresaron una defensa del paisaje y de la vida comunitaria frente al avance de las corporaciones hidroeléctricas. En México, colectivos urbanos han defendido áreas verdes como el Bosque de Chapultepec o el Ajusco, resistiendo proyectos que amenazan con reducir los espacios de uso público.

Estas experiencias demuestran que la resistencia urbana no es marginal, sino constitutiva de la vida de las ciudades. El paisaje urbano no sólo es producido por el capital y el Estado, sino también por las comunidades que defienden su territorio. La ecología política subraya que estas resistencias son fundamentales para construir alternativas de ciudad más justas, sustentables e inclusivas.

En el ámbito internacional, iniciativas como la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005) han buscado consolidar este derecho en instrumentos legales y normativos. Aunque no tiene carácter vinculante, ha servido de marco para que diversas ciudades incorporen el derecho a la ciudad en sus constituciones locales o cartas urbanas, como ocurrió en Brasil con el Estatuto de la Ciudad (2001).

El derecho a la ciudad, en este sentido, se convierte en un horizonte de lucha que articula demandas por vivienda, transporte, servicios, medio ambiente y participación política. No se trata únicamente de mejorar el acceso individual, sino de transformar estructuralmente el modelo urbano para que responda a las necesidades colectivas.

3.7. Poder, hegemonía y control en la ciudad: el paisaje urbano como escenario de legitimación política

Desde la antigüedad, la ciudad ha funcionado como escenario donde se representa y ejerce el poder político. Los espacios urbanos no son neutros: transmiten mensajes, organizan jerarquías y buscan legitimar proyectos de gobierno. El paisaje urbano es, por tanto, un dispositivo de poder simbólico y material (Foucault, 1977; Lefebvre, 1974).

En este sentido, el urbanismo puede entenderse como una herramienta política: al diseñar calles, plazas o monumentos; los Estados y las élites

definen qué memorias se recuerdan, qué prácticas se permiten y qué cuerpos son incluidos o excluidos.

La monumentalidad, las avenidas anchas, los edificios de gobierno y los proyectos de "renovación urbana" son expresiones de cómo el poder se inscribe en el paisaje. Pero también lo son los barrios marginados, invisibilizados y estigmatizados, donde el poder se manifiesta en la ausencia de servicios y derechos.

El urbanismo no sólo organiza la vida material de la ciudad, sino que produce una hegemonía política en el sentido *gramsciano*: construye consenso en torno a un modelo de ciudad. Por ejemplo, la ciudad moderna del siglo XIX buscaba representar el progreso y la nación, mientras que la ciudad neoliberal contemporánea promueve la competitividad, la inversión y la seguridad.

En ambos casos, el paisaje urbano se convierte en un discurso materializado: expresa ideologías, consolida imaginarios colectivos y naturaliza relaciones de poder. Un bulevar arbolado o un rascacielos financiero no son meras infraestructuras: son símbolos de una determinada visión de sociedad. El espacio público urbano es uno de los escenarios más claros en donde se manifiesta el poder político. Plazas, calles y parques son espacios de encuentro y protesta, pero también de vigilancia y control.

- En la antigua Roma, el Foro no sólo era espacio de intercambio, sino escenario del poder imperial.
- En el México contemporáneo, el Zócalo ha sido escenario de rituales cívicos, manifestaciones populares y despliegues militares.
- En el siglo XXI, plazas como Tahrir, en El Cairo, o la Puerta del Sol, en Madrid, muestran cómo el espacio público sigue siendo un territorio clave de disputa política.

El diseño urbano (cámaras de vigilancia, mobiliario anti-sin-techo, restricciones al uso del espacio) refleja cómo el poder busca controlar no sólo los recursos, sino también los cuerpos y sus movimientos en la ciudad.

El paisaje urbano funciona además como un instrumento de legitimidad política. Los gobiernos suelen recurrir a grandes proyectos urbanos para mostrar modernidad, capacidad de gestión o compromiso con la ciudadanía.

Estos proyectos pueden consolidar legitimidades, pero también generar resistencias. Así, por ejemplo:

- Los proyectos de Haussmann en París (siglo XIX) transformaron la ciudad en símbolo de modernidad y control, ampliando avenidas para impedir barricadas.
- En Ciudad de México, las remodelaciones del Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec buscan mostrar una ciudad global, aunque a menudo priorizan zonas de élite.
- En China, megaproyectos como la expansión de Shanghái expresan la ambición del Estado por consolidar su liderazgo global a través de la monumentalidad urbana.

El paisaje urbano, en suma, es un teatro político donde se representa la autoridad, se negocia la hegemonía y se manifiestan las resistencias.

3.8. Monumentalidad, autoritarismo y ciudad-espectáculo: disputas por el poder y el control en el espacio urbano contemporáneo

Desde las pirámides del antiguo Egipto hasta los rascacielos financieros contemporáneos, la monumentalidad ha sido una herramienta central de legitimación política. Los monumentos condensan narrativas históricas, glorifican élites y refuerzan imaginarios nacionales o imperiales.

- En la Roma imperial, el Coliseo y el Foro transmitían la grandeza del imperio y disciplinaban a la población mediante espectáculos públicos.
- En la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia no sólo conmemora la independencia, sino que constituye un espacio de control simbólico: epicentro de celebraciones oficiales y protestas ciudadanas.
- En Washington D. C., la disposición del Capitolio, el Monumento a Lincoln y la Casa Blanca construye un paisaje monumental orientado a la representación del poder democrático.

La monumentalidad urbana, por tanto, no es sólo estética, sino un dispositivo de hegemonía cultural y política.

El urbanismo autoritario se caracteriza por imponer una visión homogénea de ciudad desde el poder estatal o corporativo, sin participación ciudadana real. Su objetivo principal es garantizar control social, visibilidad y seguridad para las élites.

- En el siglo XIX, la transformación de París bajo Haussmann amplió avenidas no sólo para mejorar la movilidad, sino para facilitar el paso del ejército y evitar barricadas. El urbanismo fue, en este caso, un instrumento de control político.
- En Berlín Oriental, la construcción de la Alexanderplatz y la monumentalidad socialista buscaban mostrar la fuerza del régimen comunista, mientras que el Muro materializaba la división política.
- En Beijing, la Plaza de Tiananmén constituye un espacio monumental de control simbólico, donde se exhibe la capacidad del Estado de congregar o dispersar multitudes.

En América Latina, ejemplos de urbanismo autoritario abundan en dictaduras militares: en Buenos Aires, la dictadura (1976-1983) promovió autopistas urbanas que fragmentaron barrios populares, justificadas como modernización, pero orientadas al control territorial.

En la era neoliberal, el urbanismo autoritario adopta nuevas formas: ya no se impone exclusivamente por la fuerza, sino también mediante la construcción de la ciudad-espectáculo (Debord, 1967; Harvey, 1989). Se trata de megaproyectos, centros comerciales, museos icónicos o eventos internacionales que buscan posicionar a la ciudad en el mercado global. Así, por ejemplo:

- Barcelona 1992: los Juegos Olímpicos transformaron la ciudad en escaparate global. Aunque generaron infraestructura y turismo, también impulsaron procesos de gentrificación y turistificación que persisten hasta el día de hoy.

- Río de Janeiro 2016: los Juegos Olímpicos y el Mundial de 2014 reconfiguraron el paisaje urbano con megaproyectos que desplazaron comunidades y militarizaron favelas.
- Dubái: la construcción del Burj Khalifa y de islas artificiales es un ejemplo extremo de ciudad-espectáculo en donde la monumentalidad expresa poder económico y político en un contexto autoritario.

La ciudad-espectáculo combina monumentalidad con mercado: el paisaje urbano se convierte en mercancía visual para atraer turistas, inversores y eventos internacionales.

La monumentalidad no es estática: también puede ser resignificada por movimientos sociales.

- En Chile, tras el estallido social de 2019, la Plaza Italia de Santiago fue rebautizada por la ciudadanía como Plaza Dignidad, transformándose en un símbolo de resistencia.
- En Estados Unidos, las protestas de *Black Lives Matter* impulsaron el derribo de estatuas confederadas, cuestionando la narrativa oficial del paisaje monumental.
- En México, colectivos feministas han intervenido monumentos como el Ángel de la Independencia para visibilizar la violencia de género, mostrando que los monumentos no son intocables, sino escenarios de disputa.

La monumentalidad, entonces, no es sólo una herramienta del poder, sino también un terreno donde los sectores subalternos intervienen, resignifican y transforman el paisaje urbano.

En el siglo XXI, el urbanismo autoritario no se limita a monumentos o grandes avenidas: incorpora nuevas formas de vigilancia digital. Cámaras de seguridad, *drones* y tecnologías de reconocimiento facial convierten al paisaje urbano en un espacio de control permanente.

En China, el sistema de "ciudad inteligente" en Shenzhen integra miles de cámaras y sistemas de puntaje social que regulan el comportamiento ciudadano. En este caso, la *smart city* se convierte en urbanismo autoritario digital.

En México, programas como el C5, en Ciudad de México, instalan miles de cámaras de vigilancia que, aunque se presentan como medidas de seguridad, también generan debates sobre privacidad, criminalización y control social.

Estos ejemplos muestran que la monumentalidad contemporánea ya no es sólo física, sino también tecnológica y algorítmica, ampliando la capacidad del poder político para controlar la vida urbana.

3.9. Neoliberalismo urbano y la reconfiguración del paisaje: mercado inmobiliario, privatización del espacio público y resistencias contemporáneas

El neoliberalismo, entendido como el conjunto de políticas orientadas a liberalizar mercados, reducir la intervención estatal y priorizar la inversión privada (Harvey, 2005), ha tenido un impacto decisivo en las ciudades desde finales del siglo xx. Bajo esta lógica, el espacio urbano deja de concebirse como un bien común para convertirse en una mercancía al servicio del capital global.

Esto se traduce en tres dinámicas principales:

1. Privatización del espacio público, donde plazas, calles y parques se transforman en espacios gestionados bajo lógicas comerciales.
2. Especulación inmobiliaria que convierte la vivienda y el suelo urbano en activos financieros más que en derechos.
3. Ciudad corporativa, donde la planeación urbana se orienta a atraer inversión extranjera, turismo y eventos internacionales, subordinando las necesidades locales.

El resultado es un paisaje urbano marcado por la desigualdad: enclaves de modernidad conviven con periferias marginalizadas, generando lo que Sassen (2014) denomina “ciudades globales” fragmentadas.

El mercado inmobiliario se ha consolidado como uno de los principales motores de transformación urbana bajo el neoliberalismo. El suelo y la vivienda, en lugar de considerarse bienes de uso, se convierten en activos de inversión.

En Ciudad de México, la expansión de megaproyectos inmobiliarios en zonas como Santa Fe o Reforma responde más a intereses financieros que a necesidades habitacionales. Este tipo de proyectos desplazan a comunidades locales, encarecen el suelo y consolidan un paisaje urbano orientado a la especulación.

En Madrid, la "burbuja inmobiliaria" de 2008 mostró cómo la financiarización de la vivienda transformó barrios enteros en espacios de especulación. Tras la crisis, fondos de inversión como *Blackstone* adquirieron miles de viviendas, intensificando la expulsión de familias vulnerables.

En Nueva York, barrios como Harlem o Brooklyn experimentaron procesos similares: la inversión inmobiliaria transformó paisajes culturales históricos en enclaves de lujo, evidenciando lo que Harvey llama *acumulación por desposesión*.

La privatización del espacio público constituye otra dinámica central del urbanismo neoliberal. Plazas, parques y calles se convierten en espacios regulados por intereses privados donde se restringe el acceso o se promueve un consumo específico.

En Ciudad de México, centros comerciales como Santa Fe funcionan como "pseudo-espacios públicos": abiertos, pero bajo reglas privadas que limitan protestas o expresiones colectivas. Lo mismo ocurre con zonas como Polanco, donde la "seguridad privada" controla el uso del espacio urbano.

En Londres, los llamados *Privately Owned Public Spaces* (POPS) son ejemplos claros: áreas que aparentan ser públicas, pero son propiedad privada y están sujetas a normativas restrictivas. Esto erosiona la función democrática del espacio público, reduciéndolo a escenarios de consumo.

La ecología política interpreta esta privatización como un vaciamiento político del espacio urbano, donde se elimina su función de encuentro y protesta, reforzando su carácter de mercancía.

El neoliberalismo también ha impulsado el surgimiento de la ciudad corporativa, caracterizada por megaproyectos financieros, zonas de negocios y distritos tecnológicos. Estos enclaves buscan posicionar a la ciudad en el mercado global, pero generan paisajes urbanos profundamente fragmentados. Así, por ejemplo:

- Santa Fe (Ciudad de México): construido sobre antiguos tiraderos, este distrito corporativo es hoy símbolo del urbanismo neoliberal, con rascacielos, centros comerciales y universidades privadas. Sin embargo, su conectividad con el resto de la ciudad es limitada, y su desarrollo ha excluido a comunidades vecinas.
- Canary Wharf (Londres): transformado en los años 80 como distrito financiero, representa la reconversión de espacios industriales en enclaves corporativos. El resultado ha sido un paisaje dual: por un lado, modernidad financiera; por otro, exclusión de comunidades obreras.
- Singapur: el Estado promueve un urbanismo corporativo globalizado, con zonas de negocios altamente reguladas, pero acompañado de control social estricto.

Estos casos muestran que la ciudad corporativa es, en el fondo, un espacio de acumulación global, donde el paisaje urbano refleja la subordinación de lo local a los flujos financieros internacionales.

Frente a la expansión del urbanismo neoliberal, han emergido múltiples resistencias ciudadanas que defienden el derecho a la vivienda, al espacio público y a la ciudad.

- En Barcelona, colectivos vecinales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han logrado detener desahucios y denunciar la especulación inmobiliaria.
- En Ciudad de México, movimientos barriales han resistido contra megaproyectos como el Corredor Chapultepec o la privatización de espacios públicos.
- En Estambul, las protestas en el Parque Gezi (2013) mostraron cómo un pequeño espacio verde en disputa podía convertirse en símbolo global de resistencia al urbanismo autoritario y neoliberal.

Estas resistencias muestran que el paisaje urbano no es sólo escenario de control, sino también de lucha y posibilidad de transformación.

3.10. Resistencias urbanas y contrahegemonías contemporáneas: reapropiación del espacio, movimientos sociales, autogestión comunitaria y disputas simbólicas en la ciudad

Si bien el paisaje urbano ha sido históricamente configurado por el poder político y económico, también constituye un espacio de resistencia y disputa. La ecología política enfatiza que las ciudades no son sólo escenarios de dominación, sino también territorios donde emergen prácticas alternativas que desafían el orden establecido (Harvey, 2012; Zibechi, 2017).

Estas resistencias se manifiestan en múltiples escalas:

- Barrial: cuando comunidades defienden parques, calles o viviendas contra la especulación.
- Metropolitana: al articular movimientos por transporte digno, vivienda o agua.
- Global: a través de redes transnacionales que luchan contra el urbanismo neoliberal y autoritario.

Así, el paisaje urbano es simultáneamente un espacio de hegemonía y de contrahegemonía. Los contra-paisajes urbanos son formas materiales y simbólicas de resistencia que reconfiguran el espacio en contra de su uso dominante.

- Ocupaciones barriales: en ciudades de Brasil, los movimientos de trabajadores sin techo han ocupado edificios abandonados para transformarlos en viviendas colectivas, visibilizando la injusticia inmobiliaria.
- Intervenciones artísticas: en Ciudad de México, colectivos feministas han pintado monumentos y muros como forma de protesta contra la violencia de género, resignificando símbolos oficiales.
- Huertos comunitarios: en Nueva York, los *community gardens* surgieron en lotes baldíos de barrios marginalizados, convirtiéndose en espacios de producción de alimentos, encuentro social y resistencia cultural.

Estos contra-paisajes no sólo cuestionan el poder, sino que materializan alternativas para habitar la ciudad desde lógicas comunitarias y de cuidado.

Los movimientos sociales urbanos constituyen una de las expresiones más visibles de resistencia frente al urbanismo autoritario y neoliberal.

- En Barcelona, las luchas contra la turistificación han resignificado barrios enteros, defendiendo la vida comunitaria frente a la presión del turismo masivo.
- En Ciudad de México, las resistencias contra megaproyectos como el Corredor Chapultepec mostraron la capacidad ciudadana de detener proyectos de privatización del espacio público.
- En Estambul, el movimiento de *Gezi Park* (2013) inició como defensa de un pequeño parque y se convirtió en una movilización masiva contra el autoritarismo y la mercantilización urbana.

Estos movimientos evidencian que el poder urbano no es absoluto: puede ser desafiado, cuestionado y transformado por las prácticas colectivas.

El urbanismo comunitario constituye una alternativa frente al urbanismo neoliberal y autoritario. Se trata de procesos donde los habitantes organizan directamente la planificación, construcción y gestión de sus territorios.

En América Latina, destacan:

- Los barrios autoconstruidos en las periferias de Ciudad de México, Lima o Bogotá, que, aunque surgen en contextos de exclusión, representan formas de organización popular que producen ciudad desde abajo.
- Los cabildos urbanos en Ecuador, donde comunidades han discutido y decidido colectivamente sobre proyectos urbanos que afectan sus barrios.
- Las cooperativas de vivienda en Uruguay, que gestionan proyectos colectivos de vivienda bajo principios de solidaridad y autogestión.

Estas experiencias muestran que el paisaje urbano no es monopolio de arquitectos y planificadores: también es resultado de la creatividad y organización popular.

El arte urbano constituye una de las formas más potentes de resistencia simbólica. Grafitis, murales y performances transforman el paisaje urbano en un lienzo donde se expresan memorias, denuncias y alternativas.

- En Chile, durante el estallido social de 2019, las paredes de Santiago se llenaron de murales que denunciaban desigualdad y violencia estatal, resignificando la ciudad como espacio de protesta.
- En Palestina, los grafitis en el muro de separación constituyen un contra-paisaje que denuncia la ocupación y reivindica identidad.
- En México, los murales feministas en el centro histórico de la capital cuestionan la narrativa oficial y visibilizan violencias estructurales.

El paisaje urbano es, en este sentido, un campo de batalla simbólica donde se disputan significados, memorias y futuros posibles.

En el siglo XXI, la resistencia urbana también se articula mediante tecnologías digitales. Las redes sociales permiten coordinar movilizaciones, denunciar abusos y visibilizar conflictos invisibilizados por los medios tradicionales. Así, por ejemplo:

- Durante las protestas de Hong Kong (2019), aplicaciones móviles fueron utilizadas para evadir la vigilancia estatal y coordinar acciones en el espacio urbano.
- En Latinoamérica, colectivos han usado mapas digitales colaborativos para documentar violaciones al derecho a la ciudad, como desalojos o privatización de áreas verdes.
- En Barcelona, plataformas digitales apoyan iniciativas de municipalismo alternativo, fortaleciendo procesos de participación ciudadana.

Estas resistencias muestran que el poder político no sólo se disputa en calles y plazas, sino también en el ciberespacio, ampliando las formas de producción del paisaje urbano.

La ecología política urbana interpreta estas resistencias como formas de contrahegemonía: prácticas que disputan el sentido del paisaje urbano y abren horizontes de transformación.

Estos horizontes incluyen:

- El derecho a la vivienda como principio central de planificación.
- El reconocimiento de los comunes urbanos como alternativa a la mercantilización.
- La democratización de la planificación urbana que asegure la participación vinculante de comunidades.
- La construcción de paisajes de cuidado, basados en justicia de género, justicia climática y respeto a la diversidad cultural.

Lejos de ser marginales, estas resistencias muestran que es posible reimaginar la ciudad más allá del neoliberalismo y el autoritarismo.

4. Impactos, desigualdades y conflictos socioambientales urbanos

4.1. Desigualdad ambiental, segregación socioambiental y los impactos globales producidos por la ciudad

El análisis del paisaje urbano desde la ecología política estaría incompleto si no se examinan los impactos socioambientales derivados de la urbanización desigual. La ciudad, en su carácter de espacio concentrador de población, consumo y actividad económica, genera una serie de efectos ambientales que no se distribuyen de manera homogénea. Estos impactos se expresan en la contaminación del aire y del agua, la pérdida de áreas verdes, la formación de islas de calor, la exposición diferencial a riesgos y desastres, así como en la desigualdad en el acceso a servicios ambientales básicos como agua potable o espacios de recreación.

El punto central es que estos impactos no son accidentes inevitables de la modernidad, sino el resultado de decisiones políticas y económicas. Como argumenta Martínez-Alier (2002) en su teoría de los conflictos ecológico-distributivos, los costos ambientales suelen ser desplazados hacia los sectores más pobres, mientras que los beneficios se concentran en los grupos privilegiados. En el espacio urbano, esto se traduce en una geografía de la injusticia: barrios ricos con parques, aire limpio y acceso a infraestructura de calidad, frente a periferias pobres expuestas a basureros, fábricas contaminantes y transporte deficiente.

La noción de *justicia ambiental* resulta fundamental para entender cómo se distribuyen los impactos socioambientales en la ciudad. Como señala Bullard (1993), la justicia ambiental implica no sólo el reparto equitativo de beneficios y cargas ambientales, sino también la participación política de las comunidades y el reconocimiento cultural de sus derechos. En otras palabras, no basta con "repartir" más parques o reducir la contaminación en general: se trata de garantizar que las poblaciones históricamente excluidas tengan voz y poder de decisión en la planificación urbana.

En Estados Unidos, los estudios sobre racismo ambiental mostraron que los barrios afroamericanos y latinos eran los principales receptores de instalaciones contaminantes. En América Latina, la dinámica es similar: las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas urbanizadas suelen habitar en zonas más expuestas a riesgos ambientales. En Ciudad de México, las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero concentran altos niveles de contaminación atmosférica y escasez de agua, mientras que zonas como Miguel Hidalgo y Benito Juárez gozan de mejores condiciones ambientales.

La segregación urbana no es sólo socioeconómica, sino también ambiental. Esto significa que la desigualdad en el acceso a recursos, servicios y condiciones ambientales se materializa en el territorio. La segregación socioambiental puede analizarse en tres dimensiones principales:

1. Acceso desigual a áreas verdes y espacios públicos. Investigaciones de Heynen (2006) y Boone et al. (2009) muestran que en ciudades como Atlanta o Baltimore los barrios de bajos ingresos tienen menos áreas verdes y árboles por habitante que los barrios ricos. Esto impacta directamente en la salud, la calidad del aire y la temperatura urbana. En Ciudad de México, la distribución del arbolado urbano es altamente desigual: mientras colonias de clase alta disfrutan de parques y camellones arbolados, en Iztapalapa y Ecatepec predominan calles grises sin vegetación.
2. Exposición diferencial a la contaminación. Las industrias, los basureros y las carreteras suelen ubicarse en las periferias habitadas por sectores populares. En Monterrey, los barrios obreros del norte están rodeados de fábricas que emiten contaminantes, mientras que las

zonas residenciales del sur, habitadas por las élites, cuentan con mejores condiciones ambientales.

3. Vulnerabilidad frente a riesgos Las familias pobres se asientan frecuentemente en laderas, cauces de ríos o zonas de hundimiento, lo que las hace más vulnerables a inundaciones, deslizamientos y terremotos. En Lima, los asentamientos informales en las laderas son altamente vulnerables a desastres naturales, mientras que los barrios ricos están en zonas seguras y consolidadas.

Además de generar desigualdades internas, las ciudades son también productoras de impactos globales. El consumo energético, la movilidad motorizada y la concentración de actividades industriales convierten a las ciudades en centros emisores de gases de efecto invernadero. Según el Instituto Panamericano de Profesionales Científicos (IPPC, 2022), más de 70% de las emisiones de CO_2 a nivel mundial provienen de áreas urbanas.

Este dato es clave porque muestra la doble dimensión de la ciudad: hacia adentro, produce desigualdades socioambientales; hacia afuera, impacta en la crisis climática global. Así, el análisis del paisaje urbano desde la ecología política no puede quedarse en el ámbito local: debe articularse con las escalas regional y planetaria.

En esta primera parte se ha mostrado que los impactos socioambientales no se distribuyen de manera uniforme, sino que siguen las lógicas de la desigualdad social y económica. La justicia ambiental, en este sentido, se convierte en un marco indispensable para analizar cómo el poder define quién disfruta de un ambiente sano y quién carga con la degradación. Entonces, la ciudad es tanto un espacio de vida como un campo de injusticias ambientales estructurales.

4.2. Contaminación atmosférica, acceso desigual al agua y la gestión urbana de residuos

La contaminación del aire es uno de los impactos socioambientales más graves en las ciudades contemporáneas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), más de 90% de la población urbana mundial respira aire

con niveles de contaminación superiores a los recomendados. Sin embargo, la exposición a contaminantes no es homogénea: depende de la ubicación, el tipo de actividad económica y las condiciones socioespaciales.

En Ciudad de México, la contaminación atmosférica ha sido un problema histórico. Durante los años noventa fue catalogada como una de las ciudades más contaminadas del mundo. Aunque las políticas de control redujeron en parte los niveles de ozono y partículas, la carga sigue siendo desigual. Las zonas industriales del oriente (Iztapalapa, Nezahualcóyotl) concentran la mayor exposición, mientras que áreas residenciales del poniente disfrutan de mejores condiciones. Investigaciones de Silva et al. (2017) demuestran que la contaminación atmosférica no sólo afecta la salud respiratoria, sino que contribuye también a la reproducción de la desigualdad social: las familias con menos recursos viven más cerca de las fuentes contaminantes y tienen menos acceso a servicios de salud.

En Santiago de Chile, la situación es similar. Los barrios periféricos, donde predominan viviendas sociales y población de bajos ingresos, presentan niveles de partículas finas (PM2.5) mucho más altos que los barrios acomodados del oriente. Esto no es casualidad: la planificación urbana relegó a los sectores populares a zonas donde se concentran industrias y fuentes móviles de contaminación.

En India, Nueva Delhi se ha convertido en el símbolo de la crisis atmosférica. Con niveles de partículas que superan en más de 15 veces los límites de la OMS, la población más pobre es la más afectada, pues habita en zonas densamente pobladas, cerca de carreteras y con poco acceso a atención médica. Aquí se hace evidente lo que la ecología política plantea: la contaminación no es sólo un fenómeno técnico, sino un problema de justicia social.

El agua es otro recurso donde la desigualdad urbana se manifiesta con claridad. Mientras algunos sectores disfrutan de suministro constante y de alta calidad, otros enfrentan cortes, escasez y sobrecostos.

En Ciudad de México, la distribución del agua sigue una lógica desigual. Las alcaldías del poniente (Benito Juárez, Miguel Hidalgo) reciben agua de mayor calidad y con mayor continuidad, mientras que en Iztapalapa millones de habitantes deben recurrir a pipas para abastecerse. Estudios de Pineda (2015) muestran que la escasez de agua en el oriente no se debe a limitaciones técnicas, sino a decisiones políticas sobre la gestión del

recurso.En São Paulo, la crisis del agua de 2014 puso en evidencia la fragilidad del sistema urbano frente a la sequía. Los cortes de agua afectaron principalmente a las periferias, mientras que los barrios ricos continuaron recibiendo suministro gracias a sistemas privados de almacenamiento. El movimiento *Aliança pela Água* denunció la injusticia en la distribución y exigió políticas más equitativas.

En Sudáfrica, el caso de Ciudad del Cabo, durante la crisis del "Día Cero" (2018), mostró una dinámica similar: las comunidades pobres fueron las más afectadas por las restricciones, mientras que los barrios de clase alta implementaron soluciones privadas, como pozos y sistemas de captación, evidenciando que el acceso al agua depende del poder adquisitivo.

La privatización de los servicios de agua ha generado fuertes conflictos. Como se analizó en el caso de Cochabamba (2000), la concesión del servicio a una empresa transnacional elevó las tarifas y desencadenó protestas masivas. Experiencias similares se han vivido en Buenos Aires y Manila, donde la privatización derivó en aumentos de precio y exclusión de sectores vulnerables.

La gestión de residuos sólidos constituye otro gran desafío socioambiental urbano. Según datos del Banco Mundial (2018), el mundo genera más de 2 000 millones de toneladas de basura al año y las ciudades son responsables de más de 80% de este total. Sin embargo, la ubicación de los tiraderos y la exposición a los residuos siguen un patrón desigual.

En Ciudad de México, tras el cierre del Bordo Poniente en 2011, los residuos comenzaron a trasladarse a tiraderos en municipios periféricos como Nezahualcóyotl y Chalco, lo que trasladó el problema ambiental hacia las comunidades más pobres. Esto confirma lo que plantea la ecología política: los costos ambientales se desplazan hacia quienes tienen menos poder para resistir.

En Nápoles, Italia, la crisis de la basura de 2008 mostró cómo la corrupción y la falta de gestión adecuada llevaron a que los residuos se acumularan en barrios populares, mientras que las zonas ricas quedaron relativamente protegidas. La mafia local (Camorra) estuvo directamente involucrada en el manejo ilegal de residuos, evidenciando la relación entre poder político, crimen organizado y ambiente.

En Mumbai, India, el vertedero de Deonar recibe más de 5 000 toneladas diarias de basura y se ubica junto a barrios marginales. Los habitantes

conviven con incendios tóxicos y contaminación del aire en condiciones de extrema vulnerabilidad sanitaria. Sin embargo, de estos mismos basureros dependen miles de recicladores informales que viven de la clasificación de residuos.

El manejo de residuos también tiene una dimensión de justicia de género. En muchos países, las mujeres —particularmente migrantes o de comunidades indígenas— son mayoría entre los recicladores informales; lo que muestra cómo la desigualdad socioambiental se cruza con desigualdades de género y etnia (Gutberlet, 2016)

En esta segunda parte hemos analizado tres dimensiones centrales de los impactos socioambientales urbanos: la contaminación atmosférica, el acceso al agua y la gestión de residuos. En los tres casos se observa un patrón común: los costos ambientales recaen de manera desproporcionada sobre los sectores más pobres, mientras que los sectores privilegiados gozan de protección, servicios privados o capacidad de adaptación.

Esto confirma la tesis de la ecología política: la crisis ambiental urbana no es un problema meramente técnico, sino una expresión de la desigualdad estructural y del poder político y económico que moldea el territorio.

4.3. Islas de calor urbanas: distribución desigual, vulnerabilidad climática, salud pública y estrategias de mitigación con justicia climática

El fenómeno de las islas de calor urbanas (ICU) constituye una de las manifestaciones más visibles del impacto socioambiental de las ciudades. Se define como el aumento de la temperatura en las zonas urbanizadas respecto a sus alrededores rurales o periurbanos, debido a factores como la impermeabilización del suelo, la falta de vegetación, el uso de materiales como asfalto y concreto, y la concentración de actividades humanas (Oke, 1982).

En términos físicos, las ICU se producen porque los materiales urbanos tienen una alta capacidad de absorción y retención del calor solar, liberándolo lentamente durante la noche. Esto genera una diferencia térmica que en algunos casos puede superar los 8 a 10°C entre el centro de la ciudad y las periferias rurales.

Sin embargo, más allá de su dimensión técnica, las islas de calor urbanas son también un problema político y social, pues su intensidad y distribución están profundamente atravesadas por desigualdades urbanas.

Numerosos estudios han mostrado que las ICU no afectan a toda la población por igual. En Estados Unidos, investigaciones de Hoffman, Shandas y Pendleton (2020) revelaron que los barrios históricamente sometidos al *redlining* (segregación racial en créditos hipotecarios) son actualmente los más expuestos a islas de calor debido a la falta de áreas verdes y la alta densidad de infraestructura gris.

En América Latina, el patrón se repite. En Ciudad de México, las alcaldías centrales y de altos ingresos, como Benito Juárez y Miguel Hidalgo, cuentan con parques y camellones que mitigan las ICU. En contraste, en Iztapalapa y Gustavo A. Madero predominan superficies pavimentadas y escasez de vegetación, lo que genera temperaturas más elevadas (Jáuregui, 1997). Esto implica que los habitantes más pobres, que ya enfrentan precariedad habitacional y laboral, también carguen con el costo ambiental de temperaturas extremas.

En São Paulo, estudios de Nobre et al. (2011) muestran que las ICU son más intensas en la periferia densamente urbanizada, donde la población carece de acceso a sistemas de refrigeración y a espacios verdes. Este hallazgo demuestra que la vulnerabilidad frente al calor no depende sólo de la temperatura, sino también de la capacidad social de adaptación.

Las ICU agravan la vulnerabilidad urbana frente al cambio climático. A medida que aumentan las olas de calor extremo, las ciudades sin suficiente infraestructura verde enfrentan mayores riesgos para la salud y la calidad de vida.

En Europa, la ola de calor de 2003 provocó más de 70 000 muertes, principalmente, en ciudades como París y Madrid. La mayoría de las víctimas eran adultos mayores, habitantes de barrios con poca ventilación y sin acceso a sistemas de aire acondicionado (López, 2004). Este evento puso en evidencia cómo la vulnerabilidad climática está mediada por factores sociales: edad, ingreso, localización y acceso a servicios de salud.

En India, las olas de calor en ciudades como Ahmedabad han superado los 48 °C, provocando centenares de muertes. Allí, los sectores más afectados son los trabajadores informales que laboran en la calle y quienes

habitan en viviendas precarias de lámina o cartón, que acumulan calor de manera extrema.

En América Latina, las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México han registrado olas de calor cada vez más intensas en la última década. Estas afectan con mayor fuerza a los barrios populares, donde las casas no cuentan con aislamiento térmico ni equipos de climatización.

El impacto de las ICU sobre la salud pública es profundo. Se manifiesta en enfermedades respiratorias, cardiovasculares y dermatológicas, además de un aumento en la mortalidad durante olas de calor.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020), la exposición prolongada a altas temperaturas incrementa los riesgos de deshidratación, golpes de calor y enfermedades crónicas. Estos riesgos se potencian en poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades preexistentes.

En Ciudad de México, un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (2019) encontró que los ingresos hospitalarios por deshidratación y enfermedades respiratorias aumentan significativamente en periodos de calor extremo, especialmente en las alcaldías con menor cobertura de áreas verdes. Esto confirma la relación directa entre desigualdad urbana y vulnerabilidad en salud.

En ciudades de Estados Unidos como Phoenix y Chicago, las autoridades han implementado sistemas de alerta por calor y programas de refugios climáticos en bibliotecas, centros comunitarios y parques. Sin embargo, estos programas suelen tener cobertura limitada y no alcanzan a todas las poblaciones vulnerables.

Ante este panorama, se han impulsado diversas estrategias para mitigar las ICU. Entre ellas destacan:

1. Infraestructura verde: incremento de parques, corredores arbolados y techos verdes. En Ciudad de México, el programa de azoteas verdes ha buscado reducir temperaturas locales y mejorar la captación de agua de lluvia.
2. Infraestructura azul: integración de cuerpos de agua y sistemas de captación que refresquen el entorno urbano.

3. Materiales reflectantes y pavimentos fríos: sustitución de asfaltos oscuros por materiales que reflejan la radiación solar, como en proyectos piloto en Los Ángeles.
4. Políticas de equidad climática: prioriza la instalación de áreas verdes y refugios en barrios populares, donde el impacto de las ICU es mayor.

El concepto de justicia climática resulta clave aquí. Como señala Schlosberg (2013), no se trata sólo de reducir emisiones o adaptar ciudades, sino de garantizar que las medidas beneficien a quienes más lo necesitan y no reproduzcan desigualdades. En otras palabras, plantar árboles en colonias ricas no resuelve la injusticia: es necesario llevar infraestructura verde a las periferias y a los barrios más pobres.

El análisis de las islas de calor urbanas muestra cómo un fenómeno ambiental aparentemente técnico es, en realidad, un problema profundamente social y político. La distribución desigual del calor, la vulnerabilidad diferenciada frente a olas extremas y los impactos en la salud pública confirman que el paisaje urbano no es neutro: refleja y reproduce desigualdades estructurales.

La ecología política, al incorporar el concepto de *justicia climática*, ofrece un marco indispensable para repensar las políticas urbanas y evitar que la adaptación al cambio climático se convierta en un privilegio de las élites.

4.4 Ruido urbano, desigualdad en la movilidad, salud mental y los impactos acumulativos de la injusticia ambiental

Entre los impactos socioambientales menos visibilizados, pero de mayor alcance, se encuentra la contaminación acústica. A diferencia de la contaminación del aire o del agua, el ruido urbano rara vez aparece en la agenda política, pese a que afecta de manera directa la salud y la calidad de vida de millones de habitantes.

En ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires o São Paulo, el tráfico vehicular, el transporte público, las industrias y las actividades comerciales generan niveles de ruido que superan los límites recomendados por la OMS (55 decibelios en zonas residenciales). Sin embargo, la distribución de esta carga sonora es desigual. Los barrios populares ubicados cerca de avenidas

principales o de zonas industriales suelen estar más expuestos, mientras que las colonias residenciales de élite disfrutan de mayor tranquilidad gracias a su localización y al aislamiento arquitectónico de sus viviendas.

Los impactos del ruido no son meramente molestos: múltiples estudios han demostrado que generan estrés crónico, trastornos del sueño, pérdida auditiva y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares (Stansfeld y Matheson, 2003). Además, el ruido interfiere en el rendimiento escolar de niños y niñas que estudian en escuelas cercanas a avenidas con tráfico pesado, reproduciendo desigualdades educativas.

La contaminación acústica también se cruza con dinámicas de poder. En muchas ciudades, los barrios periféricos funcionan como "zonas de sacrificio sonoro", donde se concentran aeropuertos, terminales de autobuses o ejes viales. Estos espacios, diseñados en nombre del progreso, desplazan los costos de la movilidad hacia quienes tienen menos capacidad de defender sus derechos.

La movilidad urbana constituye otro de los ejes centrales en los impactos socioambientales. El crecimiento de las ciudades ha estado marcado por un modelo de transporte basado en el automóvil particular, lo que ha generado altos niveles de contaminación, congestión y fragmentación territorial.

En Ciudad de México, el parque vehicular supera los cinco millones de automóviles, que producen la mayor parte de las emisiones contaminantes. Sin embargo, sólo 25% de la población utiliza auto particular; el resto depende del transporte público, que suele ser deficiente, saturado e inseguro (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020). Esta paradoja revela que las externalidades ambientales —congestión, contaminación y ruido— son generadas en gran medida por las élites motorizadas, pero las sufren principalmente quienes dependen del transporte colectivo.

En Bogotá, el sistema de transporte TransMilenio buscó ofrecer una alternativa masiva, pero su saturación ha generado críticas constantes. Los usuarios de sectores populares enfrentan viajes de dos a tres horas diarias, lo que implica un costo de tiempo y energía que limita sus oportunidades educativas y laborales.

La ecología política urbana plantea que el transporte no debe analizarse sólo en términos de eficiencia técnica, sino como un campo de distribución desigual de costos y beneficios. Mientras los sectores acomodados

disfrutan de infraestructura vial y combustible subsidiado, los sectores populares soportan largas distancias, mayores gastos relativos y exposición a contaminación y accidentes.

Uno de los aspectos más recientes en el debate sobre impactos socioambientales urbanos es la salud mental. La vida en ciudades marcadas por la desigualdad, el ruido, la contaminación y la falta de áreas verdes genera un estrés constante que afecta la salud psicológica de los habitantes.

Estudios en ciudades europeas han demostrado que vivir en entornos con alta densidad de tráfico y baja disponibilidad de espacios verdes está asociado con mayores tasas de ansiedad, depresión y enfermedades psicosomáticas (Maas et al., 2006). En América Latina, investigaciones en Santiago de Chile y Ciudad de México confirman que la carencia de áreas verdes y el estrés por movilidad contribuyen a un deterioro en la salud mental, especialmente en mujeres, que, además, cargan con el trabajo de cuidados.

El problema se agrava en barrios periféricos donde la inseguridad limita el uso del espacio público. La falta de parques seguros restringe las oportunidades de recreación, lo que afecta la calidad de vida de niños y jóvenes. Desde la perspectiva del ecofeminismo, esta dimensión se vincula con el derecho al cuidado y a la reproducción social de la vida, que requiere condiciones ambientales saludables.

La contaminación del aire, el ruido, la escasez del agua, la falta de áreas verdes y el estrés por movilidad no se presentan de manera aislada, sino que se acumulan en los mismos territorios. Los barrios pobres y periféricos concentran múltiples cargas ambientales: aire contaminado, ruido excesivo, ausencia de parques, largas distancias de transporte y exposición a riesgos naturales.

Este fenómeno puede entenderse como un círculo de injusticia ambiental. Las familias que habitan estos espacios enfrentan costos más altos en salud, tiempo y energía, lo que limita sus posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. Al mismo tiempo, la falta de infraestructura adecuada reduce el valor de sus propiedades y perpetúa la segregación.

Por el contrario, los barrios de élite acumulan beneficios: mejor calidad ambiental, acceso a transporte privado, áreas verdes y servicios de salud de calidad. Esta acumulación de ventajas refuerza la reproducción intergeneracional de la desigualdad.

4.5. Metabolismo urbano desigual: agua, energía, alimentos, residuos y transformaciones del paisaje

El paisaje urbano no puede comprenderse únicamente como un conjunto de edificios, calles o plazas; es, ante todo, el resultado de procesos socioecológicos que involucran flujos de energía, agua, alimentos, materiales y residuos. Estos flujos conforman lo que la literatura denomina *metabolismo urbano*, concepto que ha sido central en la ecología política para analizar la dimensión material de la ciudad (Swyngedouw, 2006; Heynen et al., 2006).

El *metabolismo urbano* es una metáfora que compara la ciudad con un organismo vivo, pero con una diferencia crucial: a diferencia de los sistemas biológicos, el metabolismo urbano está mediado por relaciones de poder, desigualdad y acumulación capitalista. Esto significa que la distribución de agua, energía o alimentos no responde sólo a criterios técnicos, sino a decisiones políticas que benefician a ciertos grupos y marginan a otros.

El agua es quizás el ejemplo más claro de cómo los flujos metabólicos urbanos reflejan desigualdades estructurales.

En Ciudad de México, la zona poniente y las alcaldías de mayores ingresos (Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón) cuentan con infraestructura eficiente y acceso constante al agua potable, mientras que colonias de Iztapalapa o Tláhuac dependen de pipas o enfrentan cortes diarios (Tetreault, 2015). Esta distribución desigual no es producto del azar: responde a una historia de decisiones políticas que priorizaron ciertas zonas de desarrollo urbano sobre otras.

En Lima, 10 % de la población concentra 60 % del acceso al agua segura, mientras que barrios periféricos pagan precios más altos a camiones cisterna por agua de menor calidad (Vega-Centeno, 2019). La paradoja es evidente: quienes menos tienen pagan más por un recurso básico.

Estos ejemplos muestran que el agua en la ciudad no es sólo un recurso natural, sino un bien político, cuya distribución configura el paisaje urbano y define las posibilidades de vida digna.

La energía constituye otro eje central del metabolismo urbano. Las ciudades dependen de redes eléctricas, combustibles fósiles y, en menor medida,

fuentes renovables. Sin embargo, la forma en que se distribuye y consume la energía reproduce desigualdades socioeconómicas.

En barrios de élite, el consumo energético se asocia a electrodomésticos, aire acondicionado y transporte privado, mientras que en barrios pobres el acceso es limitado o intermitente. Además, los costos de transición hacia energías renovables suelen recaer en quienes menos capacidad tienen para asumirlos.

Un ejemplo es el despliegue de paneles solares en Alemania, promovido con subsidios estatales. Aunque exitoso en términos de energía limpia, benefició sobre todo a familias de clase media con capacidad de inversión, mientras que los hogares pobres quedaron al margen.

En América Latina, programas de energía renovable comunitaria —como las cooperativas eólicas en Oaxaca— muestran un modelo alternativo de gestión, aunque enfrentan tensiones con empresas privadas y proyectos estatales centralizados.

El acceso a alimentos es otro componente del metabolismo urbano. La mayoría de las ciudades dependen de largas cadenas de suministro globales, lo que genera vulnerabilidad y desigualdad.

En Caracas o La Habana, las crisis políticas y económicas han mostrado cómo la dependencia de importaciones puede colapsar el acceso alimentario. Frente a ello, se han desarrollado huertos urbanos como estrategia de resiliencia. En La Habana, más de 50 % de las hortalizas consumidas en la ciudad provienen de agricultura urbana (Altieri et al., 1999).

En ciudades globalizadas como Ciudad de México, el contraste es evidente: mientras supermercados de lujo ofrecen productos importados, barrios periféricos dependen de *tianguis* y mercados locales, con menor acceso a alimentos frescos y saludables.

Estos patrones de desigualdad alimentaria se reflejan en problemas de nutrición: obesidad en sectores populares (por alimentos ultraprocesados más baratos) y dietas saludables en sectores de élite.

Si el agua, la energía y los alimentos son entradas al metabolismo urbano, los residuos constituyen su salida. Y, como ocurre con otros flujos, su gestión también refleja desigualdades.

En Ciudad de México, la basura de colonias acomodadas termina depositada en rellenos sanitarios ubicados en municipios periféricos, como

Nezahualcóyotl o Chimalhuacán, donde las comunidades cargan con los impactos ambientales y de salud.

En Nápoles, la crisis de residuos de 2008 mostró cómo la acumulación de basura en barrios populares estaba vinculada a redes de corrupción política y crimen organizado, evidenciando que la gestión de residuos no es un problema técnico, sino político.

Además, los trabajadores que sostienen este metabolismo invertido —los recicladores y pepenadores— suelen laborar en condiciones precarias y sin reconocimiento, pese a que su trabajo es esencial para la sostenibilidad urbana. En São Paulo, las cooperativas de recicladores han logrado visibilizar esta labor, reivindicando su papel en la economía circular.

En síntesis, el metabolismo urbano ampliado revela que la ciudad es un entramado de flujos materiales profundamente desigual. El agua, la energía, los alimentos y los residuos no se distribuyen equitativamente, sino que se concentran en territorios privilegiados, mientras otros cargan con la escasez, la contaminación y los costos ambientales.

Este metabolismo desigual configura paisajes urbanos contrastantes: barrios verdes, seguros y saludables frente a periferias grises, contaminadas y vulnerables. Desde la ecología política, el análisis de estos flujos permite entender que el paisaje urbano es, en el fondo, una expresión material de la desigualdad social.

4.6. Gobernanza territorial urbana: agua, movilidad, residuos, infraestructura verde y conflictos de planificación

La gestión del agua en las ciudades es uno de los campos más ilustrativos de cómo la ecología política entiende el paisaje urbano como espacio de poder. No se trata sólo de construir presas, acueductos o redes de distribución, sino de decidir quién accede al agua, en qué condiciones y a qué costo.

En Ciudad de México, el sistema Cutzamala bombea agua desde más de 120 km de distancia para abastecer a la metrópoli, con enormes costos energéticos y ambientales. Sin embargo, barrios populares de Iztapalapa siguen recibiendo agua por tandeo. La contradicción muestra cómo las decisiones de gestión privilegian ciertos sectores urbanos mientras marginan a otros.

En Barcelona, el debate sobre la privatización del agua ha generado intensas movilizaciones ciudadanas. En 2019, colectivos exigieron recuperar la gestión pública del servicio, argumentando que las tarifas elevadas y la lógica de mercado habían vulnerado el derecho al agua. Este conflicto revela que la gestión territorial del agua no es un tema meramente técnico, sino profundamente político.

El transporte constituye otro de los grandes ejes de gestión territorial. Las ciudades modernas se expandieron bajo el modelo del automóvil privado, lo que generó congestión, contaminación y fragmentación urbana.

En América Latina, ciudades como Bogotá y Ciudad de México han intentado responder con sistemas de transporte masivo (TransMilenio, Metro), aunque con problemas de saturación. Mientras tanto, sectores de élite siguen apostando al automóvil privado, con vialidades exclusivas y estacionamientos subterráneos, reforzando la desigualdad en la movilidad.

En Europa, experiencias como la de Copenhague o de las supermanzanas en Barcelona muestran alternativas que priorizan la bicicleta, el peatón y el transporte público. Sin embargo, incluso en estos casos persisten tensiones: los proyectos suelen beneficiar más a zonas céntricas que a periferias obreras.

La ecología política subraya que la movilidad no puede analizarse sólo en términos de eficiencia: es una cuestión de justicia espacial. ¿Quién tiene derecho a moverse libremente y en condiciones dignas? ¿Qué barrios están condenados a viajes de dos horas diarias por falta de transporte adecuado?

La gestión de residuos es otra dimensión crítica del paisaje urbano. Las ciudades producen enormes cantidades de basura que deben ser recolectadas, transportadas y depositadas en algún lugar, pero ¿dónde?

En América Latina, la respuesta ha sido históricamente enviar los residuos a la periferia. Municipios como Nezahualcóyotl o Chimalhuacán cargan con los rellenos sanitarios de la Ciudad de México. De esta forma, el paisaje urbano central se "limpia", mientras la periferia se convierte en zona de sacrificio ambiental.

En Nápoles (Italia), la crisis de residuos de 2008 reveló redes de corrupción que colapsaron el sistema de gestión, acumulando toneladas de basura en barrios populares. Este caso mostró cómo la basura es también un negocio controlado por intereses políticos y mafiosos.

En contraposición, ciudades como Viena han desarrollado sistemas de gestión de residuos basados en reciclaje avanzado e incineración con recuperación de energía, logrando minimizar la acumulación en vertederos. Sin embargo, este modelo depende de una alta inversión pública, difícil de replicar en el Sur Global.

La infraestructura verde —parques, corredores ecológicos, techos y muros verdes— se ha posicionado como estrategia para mitigar los impactos socioambientales urbanos, desde islas de calor hasta inundaciones.

En Ciudad de México, proyectos como el "Bosque de Chapultepec" y los corredores verdes han buscado incrementar áreas arboladas. No obstante, en muchos casos se prioriza el embellecimiento de zonas turísticas o de alto valor inmobiliario, mientras barrios periféricos siguen sin espacios verdes adecuados.

En Nueva York, el proyecto del *High Line Park* transformó una antigua vía ferroviaria en un parque elevado, generando beneficios ambientales y turísticos. Pero también provocó gentrificación verde, elevando los precios de la vivienda en Chelsea y desplazando a residentes de bajos ingresos (Checker, 2011).

La ecología política advierte que la infraestructura verde no es neutra: depende de qué barrios reciben inversión, qué actores participan y quién se beneficia económicamente. Un parque puede ser tanto un bien común como un catalizador de especulación inmobiliaria.

La planificación urbana es, en teoría, el instrumento para armonizar estos procesos de gestión territorial. Sin embargo, la experiencia muestra que suele ser un campo de disputa entre intereses privados, estatales y comunitarios.

En Ciudad de México, los Programas de Desarrollo Urbano han sido criticados por favorecer proyectos inmobiliarios de lujo en zonas céntricas, mientras ignoran necesidades de vivienda social. Esto genera una dinámica de expulsión de pobladores hacia la periferia, donde el acceso a servicios básicos es limitado.

En Madrid, el proyecto de Operación Chamartín (rebautizado como Madrid Nuevo Norte) ha enfrentado críticas similares: se presenta como renovación urbana, pero está orientado a generar plusvalías inmobiliarias, reproduciendo desigualdades en el acceso a vivienda.

Frente a ello, movimientos sociales urbanos han impulsado contra-planificaciones: propuestas comunitarias de ordenamiento territorial que priorizan vivienda accesible, áreas verdes y transporte público. Estas iniciativas muestran que la planificación no es un ejercicio técnico neutral, sino un terreno de conflicto político.

4.7. Ciudades en comparación: desigualdades urbanas, movilidad, resiliencia y justicia ambiental en Ciudad de México, São Paulo, Medellín, Barcelona y Berlín

El análisis comparativo permite identificar cómo el capitalismo global y la distribución del poder generan raíces comunes de desigualdad en contextos geográficos distintos. A continuación, se detallan las dinámicas socioecológicas en metrópolis clave:

Ciudad de México

Esta metrópoli funciona como un ejemplo paradigmático de cómo los procesos socioecológicos configuran un paisaje urbano desigual, donde el metabolismo urbano beneficia a las élites mientras desplaza los costos a la periferia.

- *Agua*: Existe una brecha crítica entre el poniente, con redes estables, y alcaldías como Iztapalapa, que dependen de pipas y enfrentan cortes constantes. El sistema Cutzamala extrae el recurso de regiones rurales, generando despojo y conflictos territoriales.
- *Aire*: La contaminación es un problema de salud pública que castiga principalmente a los barrios periféricos, donde se concentra el transporte más antiguo y contaminante.
- *Residuos*: Con una producción de 12,000 toneladas diarias de basura, la ciudad traslada sus desechos a municipios periféricos como Nezahualcóyotl, afectando la salud de comunidades vulnerables.

São Paulo

La urbanización en esta ciudad expresa una segregación socioespacial radical, creando lo que se conoce como una "ciudad de muros" donde los paisajes de lujo conviven con la precariedad extrema.

- *Movilidad*: El impacto es diferenciado; mientras las élites utilizan helicópteros para evadir el tráfico, los trabajadores pierden entre dos y cuatro horas diarias en transporte público saturado.
- *Segregación residencial*: La división es tajante entre enclaves de lujo como Morumbi y las favelas periféricas que carecen de infraestructura básica y áreas verdes.
- *Residuos*: Aunque los rellenos sanitarios se concentran en la periferia, las cooperativas de recicladores han logrado organizar el metabolismo desde abajo, promoviendo una economía circular solidaria.

Medellín

Reconocida por su modelo de "urbanismo social", Medellín ilustra cómo la innovación técnica en infraestructura puede mejorar la vida local sin necesariamente alterar las estructuras de poder.

- *Resiliencia desigual*: A pesar del reconocimiento global, los sectores más pobres continúan expuestos a riesgos ambientales como deslizamientos.
- *Contrato social:* Las intervenciones estatales en barrios periféricos han sido señaladas por algunos críticos como proyectos de pacificación territorial más que de justicia socioambiental plena.
- *Paisaje dual:* Se mantiene un contraste fuerte entre el centro turístico, que recibe inversión masiva, y la periferia que aún enfrenta falta de servicios básicos.

Barcelona

Esta ciudad representa un caso europeo de vanguardia en sustentabilidad, aunque sus proyectos enfrentan la tensión constante con la mercantilización del espacio.

- *Supermanzanas*: Este modelo de movilidad sustentable busca reducir el tráfico vehicular y priorizar al peatón. Sin embargo, su concentración en zonas céntricas puede elevar los precios del suelo, generando "gentrificación verde".
- *Turistificación*: El impacto del turismo masivo debilita el tejido comunitario al transformar barrios enteros en paisajes orientados al visitante internacional.

Berlín

Tras la caída del Muro, la ciudad se convirtió en un laboratorio de transformación urbana. Los antiguos barrios del Este fueron objeto de intensa especulación inmobiliaria, con procesos de gentrificación que transformaron su paisaje social y cultural.

- *Gentrificación*: Barrios como Kreuzberg o Neukölln enfrentan fuertes tensiones entre dinámicas creativas, migración y turismo, por un lado, y desplazamiento de residentes de bajos ingresos, por otro. Las luchas urbanas en defensa de la vivienda —como el movimiento contra Deutsche Wohnen, una de las mayores inmobiliarias— muestran que el paisaje urbano berlinés es un campo de disputa permanente.
- *Energía*: Pese a su imagen de ciudad verde, la dependencia del carbón en Alemania impacta indirectamente en su huella ecológica, revelando que la sustentabilidad urbana no puede analizarse sólo en la escala local.

Los casos analizados —Ciudad de México, São Paulo, Medellín, Barcelona— muestran patrones comunes:

1. Metabolismo desigual: agua, energía, transporte y residuos se distribuyen de manera asimétrica, reproduciendo jerarquías sociales.
2. Paisajes duales: conviven enclaves de modernidad con periferias precarizadas.

3. Proyectos de innovación: urbanismo social, supermanzanas, movilidad sustentable, que generan mejoras locales, pero también riesgos de gentrificación y exclusión.
4. Resistencias: cooperativas, movimientos vecinales y luchas por la vivienda que disputan el modelo dominante de ciudad.

La ecología política del paisaje urbano permite comparar estos procesos mostrando que, más allá de contextos específicos, los problemas socioecológicos urbanos tienen raíces comunes en la dinámica del capitalismo global y en la distribución desigual del poder.

5. Actores, resistencias y alternativas socioecológicas urbanas

5.1. Rol de las élites económicas y políticas en la producción del paisaje urbano

La configuración del paisaje urbano no puede entenderse sin considerar el papel de las élites económicas y políticas, quienes han sido actores centrales en la definición de los proyectos de ciudad y en la reproducción de desigualdades socioespaciales. Estas élites —conformadas por gobiernos, empresarios, inmobiliarias, banqueros y, en ocasiones, medios de comunicación— poseen la capacidad de decidir dónde se invierte, qué se construye y a quién beneficia el desarrollo urbano.

5.2. El poder económico, estatal, financiero y mediático en la construcción desigual de la ciudad neoliberal

En el contexto de la ciudad neoliberal, que se consolidó a partir de la década de 1980, las élites económicas han adquirido un protagonismo creciente. Según Harvey (2008), el neoliberalismo transformó a las ciudades en espacios estratégicos para la acumulación de capital, promoviendo políticas de privatización, desregulación y mercantilización del espacio urbano. Esto implicó un debilitamiento del Estado como garante de derechos colectivos, y un fortalecimiento del sector privado como motor de la urbanización.

En la práctica, esto se traduce en la subordinación de la planificación urbana a los intereses del mercado inmobiliario. Las zonas con mayor potencial de rentabilidad —centros históricos, áreas cercanas a corredores financieros o espacios con atractivo turístico— son objeto de proyectos de renovación que elevan el valor del suelo y desplazan a las poblaciones originales. Como señala Smith (1996) en su análisis sobre la gentrificación en Nueva York, el capital busca constantemente nuevas áreas de inversión, produciendo una dinámica de "frontera urbana" donde lo popular se convierte en mercancía.

Aunque el discurso neoliberal sugiere una reducción del Estado, en realidad este sigue siendo un actor fundamental. Lo que ocurre es que el Estado reconfigura su papel para favorecer la acumulación privada. Como plantean Jessop (2002) y Brenner y Theodore (2002), la gobernanza urbana neoliberal se basa en alianzas público-privadas que canalizan recursos públicos hacia proyectos que benefician a inversionistas.

Un ejemplo claro se observa en los megaproyectos urbanos de América Latina. En Ciudad de México, la transformación de Santa Fe en un distrito corporativo durante los años noventa fue resultado de una alianza entre el gobierno y grandes desarrolladores inmobiliarios. Lo que antes era un tiradero de basura se convirtió en un enclave de lujo, con rascacielos, centros comerciales y universidades privadas. Sin embargo, el proyecto benefició principalmente a las élites, mientras que las comunidades aledañas permanecieron marginadas.

Algo similar ocurrió en Buenos Aires con la renovación de Puerto Madero, un antiguo puerto industrial transformado en zona de oficinas, restaurantes y viviendas de lujo. Este proceso fue impulsado directamente por el Estado en asociación con capital privado, generando un enclave exclusivo en contraste con la persistente precariedad de las villas cercanas.

Un actor cada vez más influyente en la producción del paisaje urbano es la banca y los fondos de inversión internacionales. Como muestran Aalbers (2016) y Rolnik (2019), la financiarización de la vivienda convirtió los inmuebles en activos globales sujetos a especulación. Ciudades como Madrid y Barcelona han sido escenarios de este proceso, donde fondos como *Blackstone* adquirieron miles de viviendas tras la crisis de 2008, elevando los precios de alquiler y expulsando a residentes de bajos ingresos.

En América Latina, esta tendencia también se manifiesta. En São Paulo, el auge de condominios de lujo y la compra masiva de terrenos por inversionistas internacionales ha modificado radicalmente la morfología urbana. La vivienda se convierte en un producto financiero desvinculado de su función social, que reproduce así la desigualdad.

Otro actor clave en la producción del paisaje urbano son los medios de comunicación, que influyen en la construcción de imaginarios sobre la ciudad. A través de campañas publicitarias se presentan ciertos proyectos como símbolos de progreso y modernidad, invisibilizando sus impactos negativos. En México, por ejemplo, la promoción de megaproyectos como el Tren Interurbano México–Toluca o el propio NAICM se acompañó de narrativas oficiales que los presentaban como inevitables y benéficos para la nación.

Los medios también contribuyen a estigmatizar barrios populares, al reforzar la percepción de inseguridad y justificar las intervenciones estatales que favorecen la "limpieza" social y la revalorización inmobiliaria. Así, los discursos mediáticos se convierten en parte de las estrategias de reproducción de desigualdades.

El resultado de esta concentración de poder en manos de élites es que la toma de decisiones urbanas se realiza de manera excluyente. Como señalan Castells (1977) y Swyngedouw (2005), la ciudadanía común queda relegada a un papel pasivo, mientras las élites definen el rumbo de la ciudad. Esto genera una democracia urbana limitada, donde las decisiones estratégicas se toman en función de la rentabilidad y no del bienestar colectivo.

El caso de las Olimpiadas de Río 2016 ilustra este fenómeno: bajo el pretexto de organizar un evento global, se realizaron desalojos masivos en favelas, se construyeron infraestructuras de lujo y se militarizó la ciudad. Todo esto benefició a empresas constructoras y al turismo internacional, pero profundizó la exclusión de las poblaciones vulnerables.

En conclusión, las élites económicas y políticas desempeñan un papel central en la producción desigual del paisaje urbano. A través de la especulación inmobiliaria, la privatización de lo público, la financiarización de la vivienda y el control de los discursos mediáticos, reproducen una ciudad fragmentada y excluyente. Desde la perspectiva de la ecología política, esto evidencia que el espacio urbano es un campo de lucha donde los intereses del capital suelen imponerse sobre los derechos colectivos.

5.3. Movimientos sociales urbanos por la vivienda, el agua, el ambiente, la igualdad de género y las expresiones juveniles en la ciudad contemporánea

Si las élites económicas y políticas han configurado gran parte del paisaje urbano desde arriba, los movimientos sociales han representado históricamente la voz de los sectores excluidos y la resistencia desde abajo. La ciudad, al ser un espacio de concentración poblacional y de desigualdades agudas, también se convierte en un escenario privilegiado para la protesta, la organización colectiva y la construcción de alternativas.

Para Castells (1977), los movimientos urbanos son formas de acción colectiva que buscan disputar no sólo bienes materiales —como vivienda, transporte o servicios básicos—, sino también la significación misma de la ciudad como espacio de vida. Estos movimientos no son residuales ni marginales: son actores centrales en la producción del espacio urbano, pues con sus luchas cuestionan y resignifican los proyectos impuestos por las élites.

Uno de los ejes más importantes de los movimientos sociales urbanos ha sido el acceso a la vivienda digna y al suelo urbano. En América Latina, donde las políticas habitacionales han sido insuficientes para responder al crecimiento acelerado de las ciudades, la autoconstrucción y las ocupaciones de terrenos han sido prácticas comunes.

En México, durante la segunda mitad del siglo XX, surgieron poderosos movimientos vecinales en colonias populares como Nezahualcóyotl y San Miguel Teotongo. Estos movimientos no sólo luchaban por regularizar la tenencia de la tierra, sino también por obtener servicios básicos como agua, luz y drenaje. Investigaciones de Ward (1999) destacan cómo la acción colectiva fue decisiva para transformar colonias informales en barrios consolidados, obligando al Estado a reconocer y dotar de infraestructura a millones de habitantes.

En Brasil, el *Movimento dos Trabalhadores Sem Teto* (MTST) ha protagonizado ocupaciones masivas de terrenos urbanos en São Paulo, denunciando la contradicción entre miles de inmuebles vacíos y millones de familias sin techo. El MTST ha logrado posicionarse como un actor político

relevante, articulando demandas de vivienda social y criticando el modelo de ciudad segregada (Maricato, 2011).

En España, tras la crisis hipotecaria de 2008, surgió la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que organizó miles de acciones contra desahucios y presionó al Estado para cambiar la legislación hipotecaria. Su lema "¡Sí se puede!" se convirtió en símbolo de resistencia urbana y muestra cómo los movimientos sociales pueden incidir directamente en las políticas públicas.

El acceso al agua ha sido otro eje crucial de lucha. Como mostró la Guerra del Agua en Cochabamba (2000), la privatización de servicios básicos puede desencadenar movilizaciones masivas que reconfiguran la política urbana. En ese caso, la concesión del agua a la empresa Bechtel generó un alza en las tarifas que afectó a los sectores populares. La protesta ciudadana, liderada por organizaciones barriales y campesinas, logró revertir la concesión, convirtiéndose en un referente global de resistencia a la mercantilización de los bienes comunes (Olivera, 2004).

En Ciudad de México, movimientos como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua han denunciado los efectos de megaproyectos hidráulicos que buscan abastecer a zonas de altos ingresos a costa de comunidades rurales y periurbanas. Estos movimientos muestran cómo el agua se convierte en un eje de disputa entre sectores privilegiados y comunidades históricamente marginadas.

El transporte también ha sido un terreno de movilización. En Santiago de Chile, las protestas de 2019 —conocidas como el "estallido social"— se originaron en un alza en la tarifa del metro, pero pronto se convirtieron en una crítica integral al modelo de ciudad neoliberal. El acceso desigual a transporte público de calidad refleja cómo la planificación urbana reproduce brechas sociales y territoriales.

Los movimientos ambientales en la ciudad han emergido con fuerza en las últimas décadas, cuestionando los impactos de la urbanización sobre la salud y el ambiente. En México, colectivos vecinales han defendido áreas verdes como el Bosque de Chapultepec, los pedregales del sur y los humedales de Xochimilco frente a proyectos inmobiliarios. Estos movimientos ponen en el centro la defensa del derecho a un ambiente sano y la preservación del patrimonio natural urbano.

En Europa, experiencias como las luchas contra la expansión del aeropuerto de Heathrow en Londres o contra la construcción de autopistas urbanas en Alemania han mostrado cómo las resistencias ambientales trascienden lo local y articulan alianzas internacionales.

En América Latina, los movimientos ambientales urbanos se vinculan frecuentemente con luchas más amplias contra el extractivismo. En Lima, Perú, colectivos urbanos han denunciado la contaminación del aire generada por la minería cercana y por la expansión descontrolada del parque automotor. En Quito, Ecuador, organizaciones ciudadanas han resistido proyectos de expansión vial que amenazan áreas protegidas en la periferia.

El feminismo urbano ha aportado una perspectiva innovadora al señalar cómo la ciudad también reproduce desigualdades de género. Investigaciones de Falú (2009) muestran que la inseguridad en el espacio público, la falta de transporte seguro y la invisibilización del trabajo de cuidados son dimensiones centrales de la exclusión urbana de las mujeres.

Colectivos feministas han impulsado iniciativas de urbanismo con perspectiva de género, que buscan garantizar iluminación en calles, transporte seguro, baños públicos accesibles y espacios de cuidado comunitario. En ciudades como Madrid y Barcelona se han desarrollado programas de "ciudades cuidadoras", que plantean una planificación urbana pensada desde las necesidades de quienes realizan trabajos de cuidados, mayoritariamente mujeres.

En América Latina, el feminismo urbano se conecta con luchas territoriales más amplias. En ciudades como Bogotá y Ciudad de México, colectivos de mujeres han liderado movilizaciones contra el feminicidio y la violencia urbana, mostrando que el derecho a la ciudad también implica el derecho a vivir libres de violencia.

Otro actor relevante en la disputa por el espacio urbano son los jóvenes, quienes a menudo encuentran en la ciudad un escenario para la creación cultural y la protesta política. Los colectivos de arte urbano, grafiti, *hip-hop* y *skate* han transformado espacios marginales en territorios de expresión cultural, disputando el sentido del espacio público. Aunque frecuentemente criminalizados, estos movimientos resignifican la ciudad desde la creatividad y la resistencia.

Ejemplos de ello se encuentran en el grafiti político de São Paulo, en los colectivos de *hip-hop* en Medellín, que trabajan en barrios históricamente

violentos, o en las redes juveniles de Ciudad de México que reclaman espacios para la cultura independiente. Estos actores muestran que la resistencia urbana no siempre adopta la forma de grandes movilizaciones, sino también de microprácticas cotidianas de apropiación del espacio.

En suma, los movimientos sociales urbanos son actores fundamentales en la producción del paisaje urbano. A través de luchas por vivienda, agua, transporte, medio ambiente, género y cultura, disputan la ciudad frente a los intereses de las élites. Desde la perspectiva de la ecología política, estas luchas no son residuales, sino constitutivas: la ciudad es un campo de tensiones donde se enfrentan proyectos de acumulación y proyectos de vida.

5.4. Ecofeminismo, resistencias comunitarias y prácticas de comunalidad frente al urbanismo neoliberal

El ecofeminismo surge como una corriente que vincula la crítica al patriarcado con la crítica a la explotación de la naturaleza. Autoras como Ariel Salleh (1997), Vandana Shiva (2005) y Silvia Federici (2010) han planteado que existe una relación estructural entre la subordinación de las mujeres y la degradación ambiental. En el contexto urbano, esto significa que la ciudad no sólo reproduce desigualdades de clase, sino también de género, invisibilizando el trabajo de cuidados y exponiendo a las mujeres a formas particulares de exclusión.

En la práctica, las mujeres suelen ser las principales responsables de garantizar agua, alimentación, energía y cuidado en el hogar. Cuando los servicios urbanos son insuficientes o costosos, la carga recae sobre ellas. De acuerdo con estudios de Falú (2009), la falta de transporte seguro, la mala iluminación en calles y la ausencia de baños públicos afectan de manera desproporcionada a las mujeres en ciudades latinoamericanas.

El ecofeminismo urbano denuncia también la violencia simbólica y material en el espacio público: acoso, feminicidios, inseguridad. Estos fenómenos muestran que el derecho a la ciudad debe pensarse desde una perspectiva de género, que garantice no sólo acceso físico, sino también seguridad, reconocimiento y autonomía.

Las comunidades urbanas, a menudo marginadas de los procesos formales de planificación, han desarrollado estrategias de resistencia y autogestión para enfrentar las lógicas de exclusión del urbanismo neoliberal. Estas resistencias se expresan en prácticas cotidianas, ocupaciones de espacios, construcción de alternativas de vida y creación de redes de solidaridad.

En México, experiencias como las asambleas comunitarias en barrios de Iztapalapa y Tláhuac han permitido organizar la defensa del agua frente a megaproyectos hidráulicos. Estos espacios colectivos demuestran que, aun en condiciones de precariedad, los barrios populares generan formas de gobernanza autónoma.

En Argentina, los movimientos barriales surgidos tras la crisis de 2001 crearon comedores comunitarios, huertas urbanas y redes de trueque que funcionaron como estrategias de sobrevivencia y también como cuestionamientos a la lógica capitalista del consumo. Estas experiencias, estudiadas por Svampa (2005), muestran cómo la autogestión comunitaria se convierte en resistencia al abandono estatal y a la mercantilización de la vida urbana.

En Brasil, las comunidades de las favelas han resistido no sólo la exclusión socioespacial, sino también la criminalización y la violencia policial. Proyectos como las "asociaciones de vecinos" o las "escuelas de samba" cumplen una doble función: cultural y política, generando cohesión comunitaria frente al estigma y la marginación.

La noción de comunalidad, desarrollada en Oaxaca por autores como Floriberto Díaz (2007), se ha convertido en una categoría clave para entender las resistencias urbanas. Aunque nació para describir prácticas comunitarias indígenas, la comunalidad se ha trasladado al contexto urbano como forma de organización colectiva basada en el trabajo comunitario, la asamblea y la defensa del territorio.

En varias ciudades latinoamericanas se han desarrollado experiencias de huertos urbanos comunitarios, mercados alternativos y redes de trueque que buscan recuperar la dimensión colectiva de la vida urbana. En Quito, proyectos de agricultura urbana han permitido a familias de barrios periféricos acceder a alimentos frescos y saludables, al tiempo que fortalecen los lazos comunitarios.

En Medellín, los procesos de apropiación barrial en comunas históricamente violentas han transformado escaleras, murales y espacios públicos en símbolos de resistencia y esperanza. Estos ejemplos muestran que incluso en contextos de marginalidad los habitantes pueden producir paisajes urbanos alternativos basados en la solidaridad.

El ecofeminismo y las resistencias comunitarias evidencian que la reproducción de desigualdades en la ciudad no se acepta pasivamente, sino que genera respuestas críticas y creativas. Mientras el ecofeminismo aporta un marco teórico y político para visibilizar la intersección entre género, poder y ambiente, las prácticas comunitarias muestran que es posible construir formas alternativas de vida urbana, basadas en la autogestión y la solidaridad.

Desde la ecología política del paisaje urbano, estas resistencias no son meras reacciones aisladas, sino proyectos políticos que disputan el sentido mismo de la ciudad: ¿será un espacio para la acumulación y el despojo, o un lugar para la vida digna y la justicia social?

5.5. Resistencias urbanas globales: luchas territoriales en México, Brasil, Europa y el Sur Global

En el caso de México, la disputa por el espacio urbano ha estado marcada por una fuerte tradición de movimientos sociales que han resistido tanto la marginación como los intentos de despojo. Un ejemplo emblemático lo constituye el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Atenco, Estado de México. Este movimiento emergió en 2001 como respuesta a la expropiación de tierras ejidales para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aunque el proyecto fue cancelado en esa primera etapa, la lucha del FPDT visibilizó la capacidad de los pueblos periurbanos para articular resistencias frente al Estado y las élites inmobiliarias (Zibechi, 2003).

La segunda versión del aeropuerto, impulsada en Texcoco entre 2014 y 2018, reavivó los conflictos. Los opositores argumentaron que, además del despojo, la construcción destruiría humedales y afectaría el equilibrio ecológico del Valle de México. La cancelación definitiva del NAICM en 2018

se debió, en parte, a la presión social, lo que muestra cómo las resistencias locales pueden incidir en megaproyectos estratégicos.

Otro caso paradigmático es el de la defensa del Bosque de Chapultepec y de los pedregales del sur de Ciudad de México, donde organizaciones vecinales han resistido la expansión inmobiliaria y comercial. Estas luchas muestran que incluso en el corazón de las metrópolis, los habitantes se organizan para proteger bienes comunes que garantizan calidad de vida.

Brasil es otro país donde los movimientos urbanos han tenido un papel protagónico en la disputa del paisaje urbano. En Río de Janeiro, las resistencias contra los desalojos forzados durante los preparativos de los Juegos Olímpicos de 2016 constituyen un ejemplo claro de cómo los megaeventos deportivos se convierten en excusa para la reestructuración urbana en beneficio de las élites.

Miles de familias fueron desplazadas de favelas ubicadas en zonas de interés inmobiliario, bajo la promesa de reubicación en complejos habitacionales periféricos. Sin embargo, las condiciones de vivienda ofrecidas resultaron precarias y alejadas de los centros de trabajo. Colectivos como *Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas* denunciaron la violación sistemática de derechos humanos y visibilizaron la dimensión política de los megaeventos (Gaffney, 2015).

Por otro lado, el *Movimento dos Trabalhadores Sem Teto* (MTST) ha continuado su labor de ocupación de inmuebles vacíos como forma de presión. Estas acciones no sólo denuncian la contradicción entre abundancia de viviendas deshabitadas y déficit habitacional, sino que además generan prácticas de autogestión comunitaria que desafían la lógica individualista del mercado.

En España, la crisis económica de 2008 abrió un ciclo de luchas urbanas muy significativo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Barcelona y Madrid lideró un movimiento sin precedentes contra los desahucios masivos. A través de la acción directa —como detener desalojos en la puerta de las viviendas—, la PAH logró visibilizar la injusticia de un sistema hipotecario que beneficiaba a la banca y despojaba a miles de familias.

Paralelamente, los movimientos contra la turistificación en ciudades como Barcelona han mostrado cómo la economía global del turismo y las plataformas digitales (*Airbnb*) impactan de manera directa en la vida

urbana. Los colectivos vecinales han denunciado que el turismo masivo encarece los alquileres, expulsa a residentes tradicionales y transforma barrios históricos en parques temáticos para visitantes internacionales (Cocola-Gant, 2016).

Estas resistencias no son marginales: han generado debates en torno al modelo de ciudad, logrando que los gobiernos locales introduzcan medidas de regulación del alquiler y límites a las licencias turísticas.

Más allá de América Latina y Europa, también en África y Asia emergen luchas urbanas que muestran la universalidad del conflicto. En India, el movimiento contra la demolición de barrios informales en Mumbai ha denunciado la violencia de los planes de renovación urbana, que buscan convertir la ciudad en un "*hub* financiero" al estilo de Shanghái, sacrificando comunidades enteras.

En Sudáfrica, los movimientos contra el *apartheid* urbano han continuado después de 1994, ya que la segregación espacial heredada sigue reproduciéndose bajo el neoliberalismo. Organizaciones como *Abahlali baseMjondolo*, que agrupa a habitantes de asentamientos informales, luchan por el reconocimiento legal de sus barrios y el acceso a servicios básicos, desafiando el racismo estructural en la configuración del espacio urbano.

Estos ejemplos, aunque diversos, comparten ciertos rasgos comunes:

1. Visibilizan las contradicciones del modelo neoliberal de ciudad, mostrando cómo los megaproyectos, el turismo masivo o la financiarización expulsan a sectores populares.
2. Generan prácticas de autogestión (huertos urbanos, redes solidarias, ocupaciones) que no sólo resisten, sino que producen alternativas concretas.
3. Construyen narrativas contrahegemónicas, desafiando el discurso oficial de progreso y modernidad, y colocando en el centro los derechos colectivos.
4. Articulan lo local y lo global, ya que muchas de estas luchas trascienden fronteras y se conectan con redes internacionales de justicia urbana.

5.6. Urbanismo tecnocrático y participativo: derecho a la ciudad, experiencias latinoamericanas y desafíos actuales

Si en los capítulos anteriores analizamos cómo las ciudades reproducen desigualdades socioambientales, en este capítulo el foco se desplaza hacia las alternativas de transformación socioecológica. La ecología política no se limita a la crítica; también busca iluminar horizontes de cambio. La pregunta central es: ¿cómo construir ciudades más justas y sustentables, capaces de responder a la crisis climática y a la desigualdad social?

Una de las respuestas más influyentes es el urbanismo participativo, que plantea que los habitantes no deben ser meros receptores de decisiones técnicas, sino protagonistas en la definición de su territorio. Esta perspectiva se articula directamente con la idea del derecho a la ciudad formulada por Henri Lefebvre (1968) y retomada por David Harvey (2008), que conciben la ciudad como un bien colectivo que debe ser transformado por quienes la habitan.

La planificación urbana tradicional ha estado dominada por enfoques tecnocráticos: arquitectos, ingenieros y planificadores diseñan la ciudad desde escritorios, priorizando criterios de eficiencia económica o estética. El problema es que este modelo ignora las necesidades reales de los habitantes y suele beneficiar a los grupos con mayor poder económico.

El urbanismo participativo, en cambio, propone abrir procesos de planeación a la deliberación ciudadana. Como señala Friedmann (1987) en *Planning in the Public Domain*, la planificación debe ser un espacio de construcción democrática donde se reconozcan los saberes locales y las experiencias de quienes habitan el territorio.

Ejemplos de este enfoque se encuentran en Porto Alegre, Brasil, con el famoso presupuesto participativo, implementado desde los años noventa. Allí, miles de ciudadanos deliberaban anualmente sobre el destino de parte del presupuesto municipal, priorizando obras en barrios populares. Aunque el modelo enfrentó limitaciones, se convirtió en un referente global de democracia urbana.

El derecho a la ciudad se ha convertido en un marco político de gran influencia para las luchas urbanas. Para Lefebvre, este derecho implicaba la

posibilidad de reinventar la vida urbana a partir de las necesidades colectivas, y no de la lógica del capital. Harvey lo reinterpretó como un "derecho colectivo a rehacernos a nosotros mismos reinventando la ciudad" (Harvey, 2008).

En la práctica, este derecho implica:

1. Acceso equitativo a los servicios urbanos (agua, transporte, salud, vivienda).
2. Participación efectiva en las decisiones sobre el territorio.
3. Apropiación y uso del espacio público como lugar de encuentro y expresión ciudadana.
4. Transformación estructural del modelo urbano hacia la justicia social y ambiental.

En 2005, diversos movimientos sociales impulsaron la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que consolidó este horizonte en un documento internacional. Posteriormente, en 2016, la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat reconoció el derecho a la ciudad como principio rector, aunque en términos generales y sin mecanismos vinculantes.

América Latina ha sido un laboratorio de urbanismo participativo. En Medellín, Colombia, programas como Urbanismo Social transformaron barrios periféricos mediante bibliotecas, teleféricos y escaleras eléctricas, construidos en diálogo con las comunidades. Estos proyectos no sólo mejoraron la infraestructura, sino que fortalecieron la identidad barrial y redujeron la violencia.

En Ciudad de México, iniciativas como los Presupuestos Participativos de las alcaldías han permitido que vecinos definan proyectos comunitarios, desde parques hasta mejoramiento de calles. Aunque su alcance ha sido limitado, muestran el potencial de abrir espacios de deliberación local.

En Montevideo, Uruguay, la figura de las comisiones vecinales ha consolidado un modelo de gobernanza barrial donde las comunidades tienen incidencia en la gestión de obras públicas y programas sociales.

Estos casos muestran que la participación ciudadana puede mejorar la distribución de recursos, legitimar políticas públicas y fortalecer el tejido social. Pese a sus logros, el urbanismo participativo enfrenta varios desafíos:

- Instrumentalización política: en ocasiones, los gobiernos utilizan la participación sólo como mecanismo de legitimación, sin transferir poder real a la ciudadanía.
- Desigualdad en la participación: sectores con mayor capital cultural y económico suelen tener más influencia en los procesos participativos, lo que puede reproducir exclusiones.
- Escala limitada: muchos proyectos participativos se concentran en barrios específicos, pero no logran transformar las dinámicas estructurales de especulación y acumulación en la ciudad.

Autores como Mouffe (2000) recuerdan que la democracia no elimina los conflictos, sino que los canaliza. En ese sentido, el urbanismo participativo no debe buscar consensos superficiales, sino abrir espacios para reconocer y gestionar los conflictos urbanos de manera justa.

El urbanismo participativo y el derecho a la ciudad representan horizontes de transformación socioecológica que ponen en el centro a los habitantes. Frente al urbanismo neoliberal, que convierte la ciudad en mercancía, estas perspectivas proponen una ciudad entendida como bien común, construida colectivamente y orientada al bienestar y la equidad.

5.7. Comunes urbanos y transición socioecológica: alternativas al urbanismo neoliberal, experiencias globales y desafíos contemporáneos

El concepto de *comunes urbanos* surge como una respuesta crítica a la privatización y mercantilización del espacio urbano. Inspirado en los debates sobre los bienes comunes (Ostrom, 1990), esta noción se refiere a aquellos recursos y espacios que son gestionados colectivamente por comunidades, fuera de la lógica exclusiva del mercado y del control estatal.

Mientras que el urbanismo neoliberal tiende a transformar todo en mercancía —desde la vivienda, hasta el agua y el transporte—, los comunes urbanos buscan rescatar la dimensión colectiva de la ciudad. Autores como Harvey (2012) y Federici (2019) destacan que los comunes no son simplemente recursos, sino prácticas sociales de cuidado, cooperación y resistencia.

Ejemplos de comunes urbanos son:

- Espacios públicos autogestionados: plazas, huertos o parques recuperados por vecinos.
- Servicios comunitarios: sistemas de agua gestionados por asambleas locales.
- Iniciativas culturales y educativas: centros sociales, bibliotecas comunitarias o fábricas ocupadas convertidas en espacios colectivos.

América Latina ha sido escenario de numerosas experiencias de comunes urbanos, muchas de ellas vinculadas a la lucha por la supervivencia en contextos de crisis económica.

En Argentina, tras la crisis de 2001, cientos de fábricas quebradas fueron ocupadas y recuperadas por trabajadores bajo formas de autogestión. Estos espacios, como la cooperativa IMPA (Industria Metalúrgica y Plástica Argentina) en Buenos Aires, no sólo mantuvieron empleos, sino que se convirtieron en centros culturales y comunitarios.

En México, barrios populares han desarrollado sistemas comunitarios de agua, donde los propios vecinos gestionan pozos, redes de distribución y cuotas, garantizando el acceso al recurso frente a la ineficiencia estatal. Estos sistemas funcionan como comunes porque dependen de la participación colectiva y del sentido de corresponsabilidad.

En Medellín, algunos colectivos han impulsado la recuperación de solares vacíos como huertos urbanos comunitarios, destinados tanto a la producción de alimentos como a la educación ambiental. Estas experiencias se vinculan con la idea de la ciudad como espacio de reproducción de la vida y no sólo de acumulación.

En Europa, el debate sobre los comunes urbanos ha sido particularmente fuerte en países como Italia y España.

En Nápoles, edificios abandonados han sido ocupados y transformados en centros sociales autogestionados, donde se realizan actividades culturales, educativas y políticas. Estos espacios desafían la propiedad privada y plantean formas alternativas de gestión urbana.

En Barcelona, el movimiento de los comunes se articuló políticamente con la llegada al gobierno municipal de la plataforma Barcelona en Comú (2015),

que buscó implementar políticas de participación ciudadana, regulación del turismo y fortalecimiento de los servicios públicos. Aunque con limitaciones, esta experiencia mostró cómo la noción de comunes puede influir en la política institucional.

En el ámbito global, destacan experiencias como los *community gardens* en Nueva York, gestionados por vecinos en terrenos baldíos, o las iniciativas de comunes digitales urbanos, como plataformas de movilidad compartida creadas desde comunidades.

Los comunes urbanos se vinculan directamente con la idea de transición socioecológica, entendida como el conjunto de cambios necesarios para superar el modelo extractivista y avanzar hacia sociedades sustentables. En el ámbito urbano, esto implica transformar el metabolismo urbano (Swyngedouw, 2006): los flujos de energía, agua, alimentos y residuos que atraviesan la ciudad.

Hoy, la mayoría de las ciudades funcionan bajo un metabolismo lineal y depredador: extraen recursos, los consumen y generan desechos sin reintegrarlos a los ciclos naturales. La transición socioecológica propone avanzar hacia un metabolismo circular, donde se reduzca el consumo energético, se fomente el reciclaje, se priorice el transporte sustentable y se fortalezcan los comunes urbanos. Así, por ejemplo:

- Energía comunitaria: en Alemania y Dinamarca existen cooperativas de energía eólica y solar donde los ciudadanos gestionan colectivamente la producción de electricidad.
- Agua comunitaria: en Cochabamba, tras la Guerra del Agua, se fortalecieron los sistemas vecinales de distribución, que funcionan con criterios de solidaridad.
- Alimentación urbana: huertos colectivos en La Habana han mostrado que la agricultura urbana puede ser clave para garantizar soberanía alimentaria en tiempos de crisis.

Aunque los comunes representan un horizonte alternativo, enfrentan desafíos importantes:

1. Conflictos con el Estado y el mercado: muchos comunes urbanos son criminalizados como ocupaciones ilegales.

2. Sostenibilidad financiera: al depender de la autogestión, enfrentan limitaciones de recursos para sostenerse en el tiempo.
3. Escalabilidad: si bien funcionan en barrios específicos, su capacidad para transformar toda la ciudad aún es limitada.
4. Cooptación política: algunos gobiernos incorporan la retórica de los comunes sin modificar las estructuras de acumulación.

Aun así, su potencial radica en que cuestionan la lógica de la mercantilización total y abren espacios para imaginar ciudades distintas.

Los comunes urbanos constituyen una de las expresiones más potentes de la transición socioecológica. Son prácticas concretas que muestran que es posible gestionar recursos y espacios de manera colectiva, solidaria y sustentable. Al mismo tiempo, plantean un horizonte político que desafía el dominio del capital y el Estado sobre la ciudad.

En este sentido, los comunes no deben verse como meros experimentos locales, sino como parte de un proceso más amplio de transformación socioecológica, que busca reconfigurar el metabolismo urbano y avanzar hacia modelos de vida urbana más justos y resilientes.

5.8. Ciudad verde, resiliencia y justicia climática: economía solidaria, transiciones urbanas y experiencias comparadas entre América Latina y Europa

En las últimas dos décadas, la retórica de la "ciudad verde" se ha convertido en un lugar común de las políticas urbanas. Gobiernos locales y organismos internacionales promueven planes de movilidad sustentable, corredores verdes, edificios energéticamente eficientes y sistemas de reciclaje. En apariencia, esto representa un avance hacia ciudades más sustentables.

Sin embargo, la ecología política advierte que muchas de estas iniciativas responden a una lógica de "ecologismo de mercado". Como señala Swyngedouw (2007), la sustentabilidad urbana es frecuentemente reducida a un conjunto de tecnologías y certificaciones, como las etiquetas de LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) en edificios, que benefician a desarrolladores inmobiliarios sin modificar las estructuras de desigualdad.

Un ejemplo de ello es la gentrificación verde: proyectos de parques o corredores ambientales que en lugar de beneficiar a comunidades vulnerables elevan el valor del suelo y expulsan a los habitantes originales. En Nueva York, el *High Line Park* transformó una antigua vía férrea en un atractivo turístico, pero aceleró la especulación inmobiliaria en Chelsea. En Ciudad de México, proyectos de "rescate" como el Parque Lineal en Iztapalapa han enfrentado críticas por priorizar la imagen urbana sobre las necesidades de los vecinos.

En otras palabras, la ciudad verde puede convertirse en un discurso legitimador del urbanismo neoliberal, si no se articula con políticas de justicia ambiental y redistribución.

Otro concepto que ha ganado fuerza es el de *resiliencia urbana*, entendido como la capacidad de las ciudades para adaptarse y recuperarse frente a desastres naturales y crisis climáticas. La red *100 Resilient Cities*, impulsada por la Fundación Rockefeller, buscó posicionar este enfoque en distintas ciudades del mundo.

Si bien la resiliencia ha aportado herramientas útiles para enfrentar riesgos, también ha sido criticada. Autores como MacKinnon y Derickson (2013) señalan que muchas políticas de resiliencia terminan trasladando la responsabilidad de adaptación a las comunidades locales, sin cuestionar las causas estructurales de la vulnerabilidad. Por ejemplo, en vez de limitar la expansión inmobiliaria en zonas de riesgo, algunos gobiernos promueven programas de resiliencia comunitaria que enseñan a los habitantes a convivir con inundaciones o deslizamientos.

Desde la ecología política, se plantea que la resiliencia debe estar vinculada con la justicia climática. Esto significa que las políticas no sólo deben adaptarse a los riesgos, sino también garantizar que la carga de los impactos y las medidas de adaptación no recaigan desproporcionadamente sobre los sectores más pobres.

En Chile, tras el terremoto y tsunami de 2010, los programas de reconstrucción priorizaron proyectos inmobiliarios privados que marginaron a los pescadores artesanales. En cambio, en Cuba, la estrategia estatal de gestión de riesgos ha logrado reducir significativamente la mortalidad en huracanes gracias a una planificación territorial que prioriza la protección de comunidades vulnerables.

La transición socioecológica también requiere transformar los modelos económicos que sustentan la vida urbana. En este contexto, la economía solidaria se ha convertido en una propuesta que busca articular la producción, distribución y consumo desde principios de cooperación y sustentabilidad, y no desde la lógica de acumulación capitalista.

En Brasil, el movimiento de economía solidaria ha promovido cooperativas de recicladores, huertos urbanos y ferias de comercio justo. Estas iniciativas no sólo generan empleo, sino que también reducen los impactos ambientales y fortalecen la cohesión social.

En Ecuador y Bolivia, los debates sobre el Buen Vivir (*Sumak Kawsay*) han inspirado políticas urbanas que integran valores comunitarios y ecológicos. Aunque su implementación ha sido desigual, representan un intento por cuestionar la hegemonía del crecimiento económico como objetivo exclusivo de la ciudad.

En Europa, ciudades como Barcelona y Berlín han fomentado cooperativas de vivienda, monedas locales y plataformas digitales cooperativas como parte de una transición hacia modelos más democráticos de economía urbana.

América Latina ofrece una variedad de experiencias que ilustran tanto el potencial como los límites de las políticas de transición socioecológica.

- Medellín (Colombia): el modelo de urbanismo social transformó barrios periféricos con transporte público innovador (metrocables), parques-biblioteca y proyectos culturales. Si bien mejoró las condiciones de vida en algunas zonas, también ha sido criticado por reforzar el control social y no modificar las desigualdades estructurales de la ciudad.
- Curitiba (Brasil): pionera en movilidad sustentable con su sistema de autobuses rápidos (BRT), ha sido reconocida globalmente. No obstante, estudios recientes señalan que el modelo ha perdido fuerza frente al crecimiento urbano descontrolado y que la desigualdad sigue marcando el acceso a servicios de calidad.
- Quito (Ecuador): la ciudad impulsó un Plan de Acción Climática que incluye transporte eléctrico y corredores verdes. Sin embargo, enfrenta tensiones entre la retórica de sustentabilidad y los intereses de expansión inmobiliaria en zonas periurbanas.

Estos casos muestran que las políticas públicas pueden generar transformaciones relevantes, pero si no cuestionan las relaciones de poder que configuran la ciudad, sus efectos son limitados.

En Copenhague, el modelo de "ciudad ciclista" ha reducido significativamente las emisiones de carbono y mejorado la movilidad. Sin embargo, su éxito también se basa en un contexto de alto ingreso y fuerte inversión pública, difícil de replicar en el Sur Global.

En Barcelona, la creación de supermanzanas (*superblocks*) busca reducir el tráfico vehicular, generar espacios peatonales y promover la movilidad activa. El proyecto ha recibido reconocimiento internacional, pero también resistencia de sectores comerciales y debates sobre si realmente beneficia a los barrios populares o sólo a áreas céntricas.

En París, el plan de "ciudad de los 15 minutos" propone que los habitantes puedan satisfacer la mayoría de sus necesidades (trabajo, educación, salud, ocio) a una distancia de 15 minutos caminando o en bicicleta. Este modelo, inspirado en la proximidad y la reducción de movilidad motorizada, representa una apuesta por repensar la ciudad desde la escala barrial.

La transición socioecológica en las políticas públicas urbanas representa un terreno de disputa entre dos modelos: uno tecnocrático, que se centra en soluciones verdes de mercado, y otro más radical, que busca integrar justicia social, participación ciudadana y economía solidaria.

Las experiencias en América Latina y Europa muestran que es posible avanzar hacia ciudades más justas y sustentables, pero también que el riesgo de cooptación es alto. Por eso, la ecología política plantea que la transición socioecológica no puede limitarse a políticas técnicas: requiere transformar las relaciones de poder que producen la desigualdad urbana.

5.9. Críticas a la sustentabilidad urbana hegemónica: perspectivas decoloniales, feministas, comparativas globales y horizontes hacia una transición poscapitalista

El auge de las políticas de ciudad verde y resiliencia ha generado un consenso en torno a la necesidad de transformar el modelo urbano. Sin embargo,

la ecología política advierte que detrás de este consenso se esconden profundas contradicciones.

En muchos casos, el discurso de la sustentabilidad se ha convertido en una estrategia de legitimación del urbanismo neoliberal. Como plantea Angelo y Wachsmuth (2020), los gobiernos locales utilizan la retórica verde para atraer inversiones y mejorar su imagen internacional sin transformar las estructuras de desigualdad. Ejemplo de ello es Dubái, que promueve proyectos de arquitectura sustentable mientras mantiene un modelo urbano profundamente desigual y dependiente de combustibles fósiles.

En América Latina, algunos planes de "ciudad verde" han servido para justificar la gentrificación. La construcción de parques lineales o ciclovías en barrios populares eleva el valor del suelo y desplaza a los habitantes originales. Este proceso, denominado "ecogentrificación" (Checker, 2011), muestra cómo incluso las iniciativas ambientalmente positivas pueden reproducir exclusión social.

Desde el Sur Global han surgido críticas al urbanismo hegemónico impuesto por organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Internacional de Desarrollo (BID), que promueven modelos homogéneos de "ciudades inteligentes" o "ciudades resilientes". Estos enfoques, aunque revestidos de neutralidad técnica, suelen ignorar las realidades locales y reproducir la dependencia tecnológica y financiera.

Autores decoloniales como Escobar (2015) plantean que las alternativas deben construirse desde los saberes locales y comunitarios, reconociendo las formas de habitar y organizar el espacio que existen fuera de la lógica capitalista. En este sentido, la transición socioecológica no debe reducirse a la incorporación de paneles solares o sistemas inteligentes de transporte, sino implicar una transformación cultural y política más profunda.

Ejemplo de ello es el concepto de Buen Vivir (*Sumak Kawsay*, *Suma Qamaña*) en Ecuador y Bolivia, que cuestiona la centralidad del crecimiento económico y propone la armonía con la naturaleza como principio rector. Aunque su traducción en políticas urbanas ha sido parcial, su potencia radica en abrir un horizonte alternativo al urbanismo globalizado.

Otra perspectiva crítica es la del urbanismo feminista, que cuestiona la invisibilización de las tareas de cuidado en la planificación urbana. Como señala Falú (2009), la ciudad ha sido diseñada históricamente desde una

perspectiva masculina, priorizando la movilidad laboral y el automóvil, mientras que el trabajo reproductivo y comunitario ha sido relegado.

El urbanismo feminista propone reorganizar la ciudad en función de las necesidades de cuidado: transporte seguro, espacios públicos accesibles, servicios de proximidad y redes comunitarias. Esta perspectiva se articula con el ecofeminismo, que subraya la relación entre la opresión patriarcal y la explotación de la naturaleza.

En Barcelona, programas como *Ciutat Cuidadora* han intentado incorporar estas ideas en la política urbana, desarrollando proyectos que favorecen la proximidad y la seguridad de las mujeres en el espacio público. En América Latina, colectivos feministas en Bogotá y Ciudad de México han visibilizado la violencia de género en el transporte y han impulsado políticas para garantizar entornos urbanos libres de violencia.

Al analizar experiencias globales de transición socioecológica, es evidente la brecha entre el Norte y el Sur Global.

En el Norte, ciudades como Copenhague, Estocolmo o Vancouver implementan políticas avanzadas de movilidad ciclista, energías renovables y gestión de residuos. Sin embargo, estas políticas se sustentan en altos niveles de ingreso, infraestructura consolidada y capacidad tecnológica.

En el Sur Global, las ciudades enfrentan el doble desafío de resolver déficits históricos de servicios básicos y al mismo tiempo adaptarse al cambio climático. En Lagos (Nigeria), Mumbai (India) o Lima (Perú), la prioridad sigue siendo garantizar agua potable, vivienda y transporte público. Aquí, la transición socioecológica no puede plantearse como un simple traslado de modelos del Norte, sino que requiere estrategias propias y contextualizadas.

Este contraste evidencia que la justicia ambiental y climática debe ser también justicia global: no todas las ciudades parten de las mismas condiciones, y las responsabilidades históricas del cambio climático son desiguales.

Varios autores plantean que una verdadera transición socioecológica no puede lograrse dentro de los límites del capitalismo. Gudynas (2011), desde el enfoque del posdesarrollo, sugiere que las alternativas deben superar la obsesión por el crecimiento y apostar por la suficiencia, la relocalización y la defensa de los bienes comunes. El urbanismo poscapitalista se imaginaría como una ciudad en donde:

- La vivienda sea un derecho y no un activo financiero.
- La movilidad priorice lo público y lo comunitario sobre el automóvil privado.
- Los espacios públicos se fortalezcan como lugares de encuentro y no como mercancías.
- El metabolismo urbano funcione en ciclos cerrados de energía y materiales.

Aunque estos horizontes puedan parecer utópicos, movimientos como los comunes urbanos, el urbanismo feminista, el ecofeminismo y el Buen Vivir ya están generando prácticas concretas que prefiguran alternativas al modelo dominante.

5.10. Desigualdades urbanas en América Latina: modernización, resiliencia, neoliberalismo y resistencias en perspectiva comparada

Los estudios de caso permiten comprender cómo los procesos generales —capitalismo, ecología política, justicia ambiental, neoliberalismo urbano— se manifiestan en realidades concretas. A través de ellos se revelan los matices locales de fenómenos globales: cómo se materializan las desigualdades, qué actores intervienen y qué resistencias emergen.

En este capítulo se revisarán ciudades de América Latina, Asia y Europa, con el objetivo de identificar similitudes y diferencias en la configuración del paisaje urbano.

La Ciudad de México constituye un caso paradigmático de urbanización desigual.

- Megaproyectos: la construcción de Santa Fe sobre antiguos tiraderos revela la lógica neoliberal de transformar territorios marginales en distritos corporativos, desconectados del resto de la ciudad.
- Agua: el sistema Cutzamala extrae agua de regiones rurales, mostrando cómo el metabolismo urbano se sostiene a costa de territorios periféricos.

- Movilidad: el metro es un ejemplo de infraestructura incluyente, pero su expansión ha sido insuficiente frente al crecimiento urbano, reforzando desigualdades en periferias.
- Gentrificación: colonias como Roma-Condesa han sido reconfiguradas por Airbnb y nómadas digitales, generando desplazamientos y fragmentación social.

La Ciudad de México combina la modernización urbana con la profundización de desigualdades, constituyendo un paisaje urbano de contrastes extremos.

En São Paulo, la urbanización expresa claramente la segregación socioespacial, creando paisajes fragmentados donde el lujo y la precariedad conviven en tensión. Sus rubros de comparación son:

- Segregación residencial: se manifiesta en la coexistencia de enclaves de lujo, como Morumbi, con extensas favelas, lo que muestra una radical desigualdad en vivienda, servicios y calidad ambiental.
- Movilidad: la élite utiliza helicópteros para evitar el tráfico, mientras la mayoría invierte horas en transporte público saturado.
- Residuos: los basureros periféricos se convierten en territorios de sacrificio, aunque las cooperativas de recicladores han resignificado el metabolismo urbano desde abajo.

São Paulo es, en palabras de Caldeira (2000), una "ciudad de muros": un paisaje fragmentado por la desigualdad.

Medellín ha sido reconocida internacionalmente por su urbanismo social, que integró teleféricos, escaleras eléctricas y bibliotecas en barrios periféricos.

- Innovación: estas infraestructuras mejoraron la movilidad y la calidad de vida de miles de habitantes.
- Limitaciones: persisten, no obstante, desigualdades estructurales en vivienda, empleo y seguridad.

- Resistencia: algunos críticos señalan que el urbanismo social fue también un proyecto de pacificación territorial, donde el Estado buscó legitimar su control.

Medellín muestra cómo la innovación urbana puede generar mejoras concretas, pero sin alterar las estructuras de poder que producen desigualdad.

En Santiago de Chile, la urbanización neoliberal ha sido particularmente intensa.

- Privatización: agua, vivienda y transporte han sido mercantilizados bajo el modelo neoliberal.
- Segregación: las comunas del oriente concentran áreas verdes y servicios, mientras que las comunas populares enfrentan contaminación y precariedad.
- Conflictos: el estallido social de 2019 tuvo un fuerte componente urbano; el alza en el precio del metro fue la chispa que visibilizó la desigualdad territorial y social.

Santiago revela cómo la ciudad neoliberal produce conflictos que desbordan el espacio urbano para convertirse en crisis políticas nacionales.

Los casos latinoamericanos presentan patrones comunes:

- Urbanización desigual con periferias marginadas y centros de élite.
- Metabolismo urbano extractivista que depende de territorios rurales.
- Resistencias urbanas que van desde cooperativas hasta estallidos sociales.

Sin embargo, cada ciudad expresa estos procesos de manera particular: la turistificación en Ciudad de México, la segregación radical en São Paulo, el urbanismo social en Medellín y el neoliberalismo extremo en Santiago.

Por otra parte, la urbanización china es quizá el caso más impactante del siglo XXI. En sólo cuatro décadas, el país pasó de ser predominantemente rural a contar con cientos de millones de habitantes urbanos.

- Megaproyectos: ciudades como Shanghái, Shenzhen y Pekín se expandieron con distritos financieros, rascacielos y megainfraestructuras de transporte.
- Autoritarismo urbano: la planificación centralizada permitió construir a gran velocidad, pero a costa de la participación ciudadana y con frecuentes desalojos forzados.
- Contradicciones: aunque China presume ciudades globales modernas, enfrenta graves problemas de contaminación del aire, desigualdad entre regiones y millones de viviendas vacías producto de la especulación inmobiliaria.
- Caso Evergrande: la crisis de la gigante inmobiliaria en 2021 mostró los riesgos del modelo basado en deuda y especulación, dejando proyectos inconclusos y familias afectadas.

China ejemplifica la lógica de la acumulación por urbanización: las ciudades como motor de crecimiento económico, pero también como foco de crisis sociales y ambientales. La urbanización en India también ha sido rápida, aunque con características distintas a China.

- Ciudades duales: en Mumbai o Delhi conviven rascacielos lujosos y *gated communities* con extensos barrios marginales como Dharavi, uno de los asentamientos informales más grandes del mundo.
- Segregación socioespacial: la especulación inmobiliaria ha transformado suelo agrícola en urbanizaciones privadas, desplazando a comunidades rurales.
- Servicios básicos: millones de habitantes carecen de agua potable, saneamiento y vivienda digna, mostrando que la modernización urbana no garantiza inclusión.
- Economía digital: el auge de plataformas tecnológicas y *call centers* ha generado empleo urbano, pero también ha precarizado amplios sectores de la población.

India revela un paisaje urbano profundamente desigual: enclaves de modernidad global conviven con territorios de exclusión estructural.

Dubái constituye un caso extremo de ciudad neoliberal construida como escaparate global.

- Megaproyectos: islas artificiales, centros comerciales gigantescos y el *Burj Khalifa* —el rascacielos más alto del mundo— son símbolos de poder económico.
- Refugio de capitales: la ciudad funciona más como espacio financiero para capitales globales, que como espacio habitable para su población.
- Exclusión social: gran parte de la infraestructura fue construida por trabajadores migrantes en condiciones precarias, invisibilizados en el paisaje oficial.
- Impactos ambientales: la desalinización de agua, el consumo energético extremo y la construcción en zonas costeras generan enormes huellas ecológicas.

Dubái es un laboratorio del capitalismo urbano global donde el paisaje se convierte en mercancía para turistas e inversores, mientras los costos recaen en trabajadores y ecosistemas.

Singapur es frecuentemente citado como modelo de planificación urbana eficiente.

- Estado fuerte: el gobierno controla estrictamente el uso de suelo, la vivienda pública y el transporte, logrando una ciudad limpia, ordenada y con altos indicadores de calidad de vida.
- Contradicciones: esta eficiencia se logra a través de un sistema autoritario que restringe libertades políticas y limita la participación ciudadana en la planificación.
- Modelo exportado: Singapur es ejemplo de "ciudad inteligente" y "ciudad verde", pero su replicabilidad es cuestionada, pues depende de un régimen político altamente controlado.

El caso de Singapur muestra que la sustentabilidad urbana puede alcanzarse, pero plantea preguntas sobre los costos democráticos y sociales de tales modelos.

Japón constituye otro caso relevante en Asia, marcado por su capacidad de resiliencia urbana.

- Sismos: ciudades como Tokio han desarrollado estrictas normativas de construcción y sistemas de alerta temprana, lo que reduce riesgos frente a terremotos.
- Eficiencia en transporte: el *Shinkansen* y la red de transporte urbano son referentes globales en movilidad sustentable.
- Retos demográficos: el envejecimiento de la población genera paisajes urbanos vacíos en regiones rurales y suburbanas, contrastando con la densidad extrema de Tokio y Osaka.
- Desastres tecnológicos: el caso de Fukushima mostró los riesgos de la dependencia nuclear, abriendo debates sobre la seguridad energética en contextos urbanos.

Japón muestra cómo la urbanización puede combinar alta tecnología y planificación avanzada, pero también enfrenta contradicciones ecológicas y sociales.

Los casos asiáticos presentan tanto similitudes como diferencias:

- Similitudes: crecimiento acelerado, urbanización orientada al capital global, exclusión social y fuertes impactos ambientales.
- Diferencias: China y Dubái representan modelos de urbanización especulativa y espectacular; India, un paisaje dual marcado por la exclusión; Singapur, un modelo de eficiencia autoritaria, y Japón, un caso de resiliencia tecnológica con retos demográficos.

En conjunto, Asia muestra la capacidad del capitalismo para producir paisajes urbanos de gran escala, pero también las contradicciones profundas entre modernización, equidad y sustentabilidad.

Referencias

Acselrad, H. (2004). *Justicia ambiental y construcción social del riesgo*. CLACSO.

Brenner, N., y Theodore, N. (2002). *Spaces of neoliberalism: Urban restructuring in North America and Western Europe*. Blackwell.

Caldeira, T. P. R. (2000). *City of walls: Crime, segregation, and citizenship in São Paulo*. University of California Press.

Castells, M. (1997). *La era de la información* (Vol. II: El poder de la identidad). Alianza Editorial.

Debord, G. (1967). *La sociedad del espectáculo*. Buchet-Chastel.

Escobar, A. (2015). *Sentipensar con la Tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Ediciones UNAULA.

Gudynas, E. (2011). Buen Vivir: Germinando alternativas al desarrollo. *América Latina en Movimiento, 462,* 1-20.

Harvey, D. (1989). *The condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change*. Blackwell.

Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.

Harvey, D. (2012). *Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution*. Verso.

Lefebvre, H. (1974). *La producción del espacio*. Anthropos.

Lefebvre, H. (1996). *Writings on cities*. Blackwell.

Latouche, S. (2009). *Pequeño tratado del decrecimiento sereno*. Icaria.

Martínez Alier, J. (2004). *El ecologismo de los pobres: Conflictos ambientales y lenguajes de valoración.* Icaria.

Porto Gonçalves, C. W. (2012). *La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la globalización.* CLACSO-Siglo XXI.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder y clasificación social. *Journal of World- Systems Research, 6*(2), 342-386.

Raworth, K. (2017). *Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist.* Chelsea Green Publishing.

Rolnik, R. (2019). *Urban warfare: Housing under the empire of finance.* Verso.

Sassen, S. (2014). *Expulsions: Brutality and complexity in the global economy.* Harvard University Press.

Salleh, A. (1997). *Ecofeminism as politics: Nature, Marx and the postmodern.* Zed Books.

Shiva, V. (1988). *Staying alive: Women, ecology and development.* Zed Books.

Srnicek, N. (2017). *Platform capitalism.* Polity Press.

Swyngedouw, E. (2005). Governance innovation and the citizen: The Janus face of governance-beyond-the-state. *Urban Studies, 42*(11), 1991-2006.

Zibechi, R. (2017). *Territorios en resistencia: Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas.* Bajo Tierra Ediciones.

Sobre los autores

Fermín Carreño Meléndez

Es investigador y académico con formación en Economía y Urbanismo. Es doctor en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Pedagogía Crítica, con formación doctoral adicional en Pedagogía Crítica y Educación Popular. Actualmente se desempeña como profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMÉX), donde ha sido director de la facultad de Planeación Urbana y Regional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I y participa activamente en redes académicas como la Red de Investigadores por la Sustentabilidad (Redis) y la Red Internacional de Investigadores sobre Problemas Socio-Urbanos y Ambientales (Riipsura).

Su trabajo se centra en la *sustentabilidad*, la *ecología política* y las *dinámicas territoriales en contextos urbanos y rurales*, articulando marcos teóricos críticos con análisis empíricos aplicados. Entre sus contribuciones más recientes destaca el capítulo "La sustentabilidad urbana" (2022), coeditado con David Iglesias Piña y Luis Alberto Olín Fabela; el capítulo "Las determinaciones territoriales y el discurso de la 'sustentabilidad'" (2022); la coautoría de *La vulnerabilidad social por inundaciones en México* (2023), y el capítulo "La sustentabilidad: un concepto para alcanzar el desarrollo" (2023).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6485-1053

Google Scholar: https://scholar.google.com.mx/citations?user=ePIDCicAAAAJ&hl=es

ResearchGate: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Fermin-Carreno-Melendez-2201239722

Academia: https://independent.academia.edu/FerminCarre%C3%B1oMelendez

Martín David Rosas Martínez

Es investigador especializado en Ciencias Ambientales y Estudios Urbanos. Es licenciado en Ciencias Ambientales y maestro en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMÉX), donde también cursa estudios de doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo. Su trabajo aborda las interacciones entre procesos ambientales urbanos y estructuras territoriales, con un enfoque metodológico en sistemas de información geográfica y análisis espacial para comprender fenómenos socioambientales contemporáneos. Entre sus aportaciones más recientes se encuentra el artículo "Islas de calor urbana superficiales en Toluca y Zinacantepec, Estado de México en 2022" (2025), publicado en la revista Vivienda y Comunidades Sustentables.

ORCID: https://orcid.org/0009-0006-5746-6110

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=zhLLcacAAAAJ

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Martin-David-Rosas-Martinez?ev=hdr_xprf

Ecología política del paisaje urbano, de
Fermín Carreño Meléndez y Martín David Rosas
Martínez, publicado por Ediciones Comunicación
Científica, S. A. de C. V., se terminó de imprimir en febrero
de 2026, en Litográfica Ingramex, S. A. de C. V., Centeno 162-
1, Granjas Esmeralda, 09810, Ciudad de México. El tiraje fue de 500
ejemplares impresos y en versión digital para acceso abierto en los formatos
PDF, EPUB y HTML. El cuidado de la edición estuvo a cargo de Darío Escalante.

La presente obra analiza el paisaje urbano desde la ecología política, entendido como una construcción sociohistórica atravesada por relaciones de poder, procesos de acumulación capitalista y profundas desigualdades socioambientales. Por ello, toma un enfoque interdisciplinario que conecta la geografía crítica, la teoría urbana, la sociología y los estudios ambientales. Paralelamente, se examina cómo el Estado, el mercado y diversos actores sociales intervienen en la producción desigual del espacio urbano. El texto aborda fenómenos como la mercantilización del suelo, la gentrificación, la segregación socioespacial y la distribución asimétrica de riesgos y beneficios ambientales, especialmente en su vinculación con la crisis climática y la vulnerabilidad urbana. De igual modo, se incorporan los aportes de la ecología política latinoamericana y las perspectivas decoloniales que permiten cuestionar los modelos hegemónicos de desarrollo y urbanización impuestos en el Sur Global. También se incluye la dimensión simbólica y cultural del paisaje urbano con relación al papel de los imaginarios, la memoria colectiva y las prácticas cotidianas en la apropiación del espacio. Finalmente, se reflexiona sobre el derecho a la ciudad y las formas de resistencia y acción colectiva que buscan construir alternativas socioecológicas orientadas a la justicia social, la equidad territorial y la sustentabilidad urbana.

Fermín Carreño Meléndez es Doctor en Urbanismo por la UNAM y Doctor en Pedagogía Crítica por el Instituto Peter McLaren. Pertenece al SNII nivel 1. Profesor-Investigador adscrito a la Facultad de Planeación de la UAEMéx y Presidente del Consejo Consultivo para la reforma de Ley de la UAEMéx. Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado "Desarrollo Sustentable, Sociedad y Ambiente".

Martín David Rosas Martínez es Licenciado en Ciencias Ambientales y Maestro en Estudios de la Ciudad por la UAEMéx. Actualmente cursa el Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo en la misma institución, donde se enfoca en temas como las islas de calor urbanas, la ecología política del territorio y los conflictos socioambientales. Se desempeña como Subdirector Administrativo del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable (CEDES-UAEMéx).

Dimensions

RENIECYT
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
2000922

Google Scholar

Dialnet

turnitin

OPEN ACCESS

doi

DOI.ORG/10.52501/CC.413

ISBN: 978-968-9738-68-8

9 789689 738688

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA PUBLICACIONES ARBITRADAS
HUMANIDADES, SOCIALES Y CIENCIAS
www.comunicacion-cientifica.com